

Suplemento del Registro Oficial No. 35, 28 de Septiembre 2009

Normativa: Vigente

Última Reforma: Suplemento del Registro Oficial 279, 29-III-2023

LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DEL ESTADO

(Ley s/n)

Nota: De conformidad con los Arts. 26 y 27 de la Ley s/n, R.O. 279-S, 29-III-2023 se dispone:

- a) Reemplácese la frase: "la Secretaría Nacional de Inteligencia" por: "el ente rector del Sistema Nacional de Inteligencia".
- b) Reemplácese la frase: "La Secretaría Nacional de Inteligencia" por: "El ente rector del Sistema Nacional de Inteligencia".
- c) Reemplácese la frase: "a la Secretaría Nacional de Inteligencia" por: "al ente rector del Sistema Nacional de Inteligencia".
- d) Reemplácese la frase: "de la Secretaría Nacional de Inteligencia" por: "del ente rector del Sistema Nacional de Inteligencia".
- a) Reemplácese la frase: "del Ministerio de Coordinación de Seguridad o quien haga sus veces" por: "de la entidad encargada de la coordinación de la seguridad pública y del Estado".
- b) Reemplácese la frase: "el Ministerio de Coordinación de Seguridad o quien haga sus veces" por: "la entidad encargada de la coordinación de la seguridad pública y del Estado".
- c) Reemplácese la frase: "Ministerio de Coordinación de Seguridad o quien haga sus veces" por: "entidad encargada de la coordinación de la seguridad pública y del Estado".
- d) Reemplácese la frase: "Del Ministerio de Coordinación de Seguridad o quien haga sus veces" por: "De la entidad encargada de la coordinación de la seguridad pública y del Estado".

Nota:

La norma que regulaba esta materia, con anterioridad, puede ser consultada en nuestra sección histórica.

	INICIO CONCORDANCIA	
Concordancia(s):		



LEY DE SEGURIDAD NACIONAL

(Ley No. 275)

Nota sobre la vigencia:

La presente norma ha sido derogada por la Disposición Final, num. 1 de la Ley s/n (R.O. 35-S, 28-IX-2009).

LA SECRETARÍA GENERAL DEL CONSEJO DE SEGURIDAD NACIONAL

En ejercicio de la facultad que le confiere la Primera Disposición Transitoria del Decreto Supremo No. 3644-A de 20 de julio de 1979, promulgado en el Registro Oficial No. 887 de 2 de Agosto del mismo año;

Resuelve:

Expedir la Siguiente codificación de la

LEY DE SEGURIDAD NACIONAL

Ley No. 275

EL CONSEJO SUPREMO DE GOBIERNO

En ejercicio de las atribuciones de que se halla investido,

Expide:

La siguiente

LEY DE SEGURIDAD NACIONAL

Título I DE LA SEGURIDAD NACIONAL

Capítulo I PRINCIPIOS BÁSICOS

Art. 1.- La Seguridad Nacional del Ecuador, es responsabilidad del Estado.

Art. 2.- El Estado garantiza la supervivencia de la colectividad, la defensa del patrimonio nacional y la consecución y mantenimiento de los Objetivos Nacionales; y, tiene la función primordial de fortalecer la unidad nacional, asegurar la vigencia de los derechos fundamentales del hombre y promover el progreso económico, social y cultural de sus

https://edicioneslegales.com.ec/



habitantes, contrarrestando los factores adversos internos y externos, por medio de previsiones y acciones políticas económicas, sociales y militares.

Art. 3.- Los ecuatorianos y los extranjeros en el territorio nacional, sean personas naturales o jurídicas son responsables y están obligados a cooperar para la Seguridad Nacional en la defensa de la Soberanía e Integridad Territorial, con el Consejo de Seguridad Nacional y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, en la forma y condiciones determinadas en ésta y las demás Leyes.

Nota:

De acuerdo con el Art. 2 de la Convención sobre Condiciones de los Extranjeros, los extranjeros domiciliados en un país únicamente pueden ser obligados a cooperar en tareas de Seguridad Nacional relacionada a la protección de la localidad de sus domicilios contra catástrofes naturales o peligros que no provengan de querra.

Capítulo II DE LA AUTORIDAD MÁXIMA DE LA SEGURIDAD NACIONAL

- **Art. 4**.- El Presidente de la República es la Autoridad Máxima y tiene los más altos poderes y responsabilidades de Seguridad Nacional, en tiempo de paz y en tiempo de guerra.
- **Art. 5**.- Los poderes y responsabilidades del Presidente de la República en la preparación, organización y dirección de la Seguridad Nacional, son permanentes e indelegables.
- **Art. 6**.- En el ejercicio de las funciones relativas a Seguridad Nacional, el Presidente de la República contará con el asesoramiento y colaboración directa del Consejo de Seguridad Nacional y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, como organismos de planificación y de ejecución.
- Art. 7.- Son atribuciones y deberes principales del Presidente de la República:
- a) Presidir el Consejo de Seguridad Nacional;
- b) Decidir la política de Seguridad Nacional que posibilite la consecución de los Objetivos Nacionales;
- c) Determinar y actualizar los Objetivos Nacionales Permanentes, considerando las aspiraciones auténticas y los intereses legítimos del pueblo;
- d) Mantener el orden interior y cuidar de la Seguridad exterior del Estado;
- e) Dirigir la preparación, actualización y ejecución de la planificación de Seguridad Nacional, considerando los Objetivos Nacionales Permanentes;
- f) Determinar y ejecutar la participación del Ecuador en la Defensa Continental, de acuerdo con los compromisos contraídos por el Estado en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca y en otros instrumentos internacionales de los que formare parte;



- g) Determinar los asuntos que deben ser estudiados por el Consejo de Seguridad Nacional o por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas;
- h) Impartir directivas a través de la Secretaría General del Consejo de Seguridad Nacional, a los Frentes de Acción de Seguridad Nacional, a las entidades de derecho público, descentralizadas e instituciones de derecho privado con finalidad social o pública, sobre la elaboración de estudios y planes que interesen a la Seguridad Nacional;

Notas:

- De conformidad con el D.E. 1046-A (R.O. 345, 26-V-2008) la Dirección Nacional de Defensa Civil fue reorganizada mediante la figura de Secretaría Técnica de Gestión de Riesgos adscrita al Ministerio de Coordinación de Seguridad Interna y Externa. Asume por tanto, todas sus competencias, atribuciones, funciones, representaciones y delegaciones constantes en leyes, reglamentos y demás instrumentos normativos.
- Mediante D.E. 42 (R.O. 31, 22-IX-2009), se cambió la denominación de la Secretaría Técnica de Gestión de Riesgos a Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.
- i) Convocar al Consejo de Seguridad Nacional a sesiones ordinarias y extraordinarias, de acuerdo con el Reglamento;
- j) Declarar a las Fuerzas Armadas Nacionales en campaña mientras exista el peligro de inminente agresión externa, de guerra internacional, de grave conmoción o de catástrofe interna;
- k) Declarar el estado de emergencia nacional y decretar Zonas de Seguridad, en caso de inminente agresión externa, de guerra internacional, de grave conmoción o catástrofe interna, y asumir las atribuciones que le confiere la Constitución;
- I) Determinar Áreas Reservadas, en los términos establecidos en la presente Ley;
- m) Crear nuevos organismos de Seguridad Nacional y ampliar o modificar los existentes;
- n) Asumir la Dirección Política de la Guerra; y,
- ñ) Las demás que contemple la Ley.

Capítulo III DE LOS ORGANISMOS SUPERIORES DE SEGURIDAD NACIONAL

- Art. 8.- Los organismos superiores de Seguridad Nacional son:
- a) El Consejo de Seguridad Nacional; y,



b) El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Capítulo IV DEL CONSEJO DE SEGURIDAD NACIONAL

Sección 1a. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

- **Art. 9.-** El Consejo de Seguridad Nacional estará conformado por el Presidente de la República, quién lo presidirá y por los siguientes miembros:
- a) Presidente de la Cámara Nacional de Representantes;

Nota:

Las reformas a la Constitución Política (R.O. 569, 1-IX-1983) cambiaron la denominación Cámara Nacional de Representantes por Congreso Nacional. En la Constitución vigente se determina que la Función Legislativa es ejercida por la Asamblea Nacional.

- b) Presidente de la Corte Suprema de Justicia;
- c) Presidente del Consejo Nacional de Desarrollo;
- d) Directores de los Frentes de Acción de Seguridad Nacional;
- e) Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas; y,
- f) (Reformado por la Disposición General de la Ley 98-12, R.O. 20-S, 7-IX-1998) Presidente del Directorio del Banco Central del Ecuador.
- **Art. 10.-** El Presidente del Consejo de Seguridad Nacional convocará a las sesiones a cualquier funcionario civil o militar o a cualquier ciudadano para fines de información, asesoramiento, o para el desempeño de funciones y trabajos que tengan relación con Seguridad Nacional.
- Art. 11.- Corresponde al Consejo de Seguridad Nacional:
- a) Recomendar sobre la formulación de la Política de Seguridad Nacional que posibilite la consecución de los Objetivos Nacionales;
- b) Supervisar la ejecución de la Política de Seguridad Nacional en todos los campos de la actividad del Estado;
- c) Dictaminar sobre los asuntos a los que se refieren los Arts. 48 literal e), 49 y 51;
- d) Recomendar sobre la participación del País en la Defensa Continental, de acuerdo a los



instrumentos internacionales de los cuales fuere signatario; y,

- e) Los demás deberes y atribuciones que señala la presente Ley.
- Art. 12.- Los organismos de trabajo del Consejo de Seguridad Nacional son:
- a) La Secretaría General;
- b) Los Frentes de Acción de Seguridad Nacional;
- c) Las Direcciones de Planeamiento de Seguridad para el Desarrollo Nacional;
- d) Los organismos que estableciere el Presidente de la República en uso de las atribuciones que le confiere el Art. 7, literal m); y,
- e) Las Comisiones especializadas que nombre el Presidente de la República para estudio, planificación y ejecución de determinados asuntos de Seguridad Nacional.

Sección 2a.

DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL CONSEJO DE SEGURIDAD NACIONAL

Art. 13.- La Secretaría General del Consejo de Seguridad Nacional, que estará a cargo de un Secretario General, es un organismo de nivel superior y de carácter permanente, dependiente de la Presidencia de la República.

Su misión es asesorar al Consejo de Seguridad Nacional y facilitar su funcionamiento, tramitar las decisiones del Presidente de la República, elaborar los planes de Seguridad Nacional y coordinar las actividades específicas de todos los organismos de Seguridad Nacional.

- De conformidad con el D.E. 1046-A (R.O. 345, 26-V-2008) las funciones de la Secretaría General del Consejo de Seguridad Nacional en materia de defensa civil serán de competencia de la Secretaría Técnica de Gestión de Riesgos adscrita al Ministerio de Coordinación de Seguridad Interna y Externa.
- Mediante D.E. 42 (R.O. 31, 22-IX-2009), se cambió la denominación de la Secretaría Técnica de Gestión de Riesgos a Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.
- **Art. 14**.- El Secretario General será la principal autoridad administrativa del Consejo de Seguridad Nacional nombrado por el Presidente de la República a pedido del Ministro de Defensa Nacional, de entre los oficiales generales de las Fuerzas Armadas en servicio activo. Le corresponde las siguientes atribuciones y deberes:
- a) Orientar y coordinar la planificación de Seguridad Nacional;
- b) Designar o proponer el nombramiento y la remoción según corresponda, de los



funcionarios de los organismos dependientes de la Secretaría General;

- c) Tramitar para su aprobación el presupuesto de la Secretaría General y sus dependencias;
- d) Representar legalmente a la entidad; y,
- e) Las demás establecidas en la presente Ley y su Reglamento.
- **Art. 15**.- La Secretaría General del Consejo de Seguridad Nacional estará integrada por personal civil y militar especializado y previamente calificado. Su organización y atribuciones se fijarán en el Reglamento.

Notas:

- De conformidad con el D.E. 1046-A (R.O. 345, 26-V-2008) las funciones de la Secretaría General del Consejo de Seguridad Nacional en materia de defensa civil serán de competencia de la Secretaría Técnica de Gestión de Riesgos adscrita al Ministerio de Coordinación de Seguridad Interna y Externa.
- Mediante D.E. 42 (R.O. 31, 22-IX-2009), se cambió la denominación de la Secretaría Técnica de Gestión de Riesgos a Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.
- **Art. 16**.- Dependen de la Secretaría General del Consejo de Seguridad Nacional, la Dirección Nacional de Movilización, la Dirección Nacional de Defensa Civil, la Dirección Nacional de Inteligencia y el Instituto de Altos Estudios Nacionales, cuya organización y funcionamiento constarán en los Reglamentos respectivos.

- De conformidad con el D.E. 1046-A (R.O. 345, 26-V-2008) las funciones de la Secretaría General del Consejo de Seguridad Nacional en materia de defensa civil serán de competencia de la Secretaría Técnica de Gestión de Riesgos adscrita al Ministerio de Coordinación de Seguridad Interna y Externa.
- De conformidad con el D.E. 1046-A (R.O. 345, 26-V-2008) la Dirección Nacional de Defensa Civil fue reorganizada mediante la figura de Secretaría Técnica de Gestión de Riesgos adscrita al Ministerio de Coordinación de Seguridad Interna y Externa. Asume por tanto, todas sus competencias, atribuciones, funciones, representaciones y delegaciones constantes en leyes, reglamentos y demás instrumentos normativos.
- El Art. 2 del D.E. 1768 (R.O. 613-S, 16-VI-2009), determina que la Dirección Nacional de Inteligencia se denominará en adelante Secretaría de Inteligencia, y estará adscrita temporalmente al Ministerio Coordinador de Seguridad Interna y Externa.
- Mediante D.E. 42 (R.O. 31, 22-IX-2009), se cambió la denominación de la Secretaría Técnica de Gestión de Riesgos a Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.
- **Art. 17**.- La Dirección Nacional de Inteligencia como organismo especializado, tendrá la misión fundamental de proporcionar la información estratégica que sirva de base para la elaboración y ejecución de los planes de Seguridad Nacional.



La Dirección Nacional de Inteligencia coordinará las actividades de los Organismos de informaciones que forman parte de la estructura de Seguridad Nacional.

Nota:

El Art. 2 del D.E. 1768 (R.O. 613-S, 16-VI-2009), determina que la Dirección Nacional de Inteligencia se denominará en adelante Secretaría de Inteligencia, y estará adscrita temporalmente al Ministerio Coordinador de Seguridad Interna y Externa.

Sección 3a. DE LOS FRENTES DE ACCIÓN DE SEGURIDAD NACIONAL

10.

FRENTES DE ACCIÓN

Art. 18.- Los Frentes de Acción de Seguridad Nacional son:

- a) El Frente Externo;
- b) El Frente Interno;
- c) El Frente Económico; y,
- d) El Frente Militar.
- **Art. 19.-** Los Frentes de Acción de Seguridad Nacional realizarán coordinadamente el estudio, la investigación y la planificación necesarias para la elaboración de los documentos correspondientes que permitan la consecución y mantenimiento de los Objetivos Nacionales, de acuerdo con las directivas que emanen del Presidente de la República.
- **Art. 20.** En cada Frente de Acción de Seguridad Nacional su Director será responsable por la coordinación, supervisión y ejecución de los trabajos inherentes a Seguridad Nacional.

20.

DEL FRENTE EXTERNO

Art. 21.- El Frente Externo está constituido por el Ministerio de Relaciones Exteriores y su dirección corresponde al titular de dicha Secretaría de Estado.

Nota:

Según la actual estructura ministerial establecida en el Art. 16 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, el Ministerio de Relaciones Exteriores es actualmente Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración.

Art. 22.- Corresponde al Director del Frente Externo asesorar al Presidente de la República y al Consejo de Seguridad Nacional en la formulación de directivas para la ejecución de la Política Internacional, encaminada a la consecución de los Objetivos Nacionales.



- **Art. 23.-** Es misión del Frente Externo robustecer constantemente la situación política internacional del Ecuador, protegiendo los intereses del Estado en el campo internacional, defendiendo sus derechos territoriales y su prestigio frente a las demás naciones y cooperando al desarrollo socio-económico del país.
- **Art. 24.** La planificación y ejecución de la Política Internacional que efectúe el Frente Externo, se fundamentará en las conveniencias nacionales, teniendo en cuenta el Poder Nacional, y particularmente, la capacidad militar; con este propósito, el Frente Externo coordinará y colaborará con los demás Frentes de Acción de Seguridad Nacional.

30.

DEL FRENTE INTERNO

Art. 25.- El Frente Interno está constituido por los Ministerios de Gobierno y Policía, de Educación Pública y Deportes, de Trabajo y Bienestar Social y de Salud Pública. Su dirección corresponde al Ministro de Gobierno y Policía.

- Según la vigente estructura ministerial establecida en el Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, el Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos y el Ministerio de Bienestar Social, son dos ministerios independientes, lo mismo que ocurre con los ministerios de Deportes y Educación. Adicionalmente, esta misma norma fija la actual denominación del Ministerio de Gobierno y Policía como Ministerio de Gobierno, Cultos, Policía y Municipalidades.
- Según la actual estructura ministerial establecida en el Art. 16 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, la denominación del Ministerio de Bienestar Social cambia a Ministerio de Inclusión Económica y Social (R.O. 158-S, 29-VIII-2007).
- Mediante D.E. 10 (R.O. 10, 24-VIII-2009), se fusionó la Secretaría Nacional Técnica de Desarrollo de Recursos Humanos y Remuneraciones del Sector Público, SENRES, con el Ministerio de Trabajo y Empleo, creándose el Ministerio de Relaciones Laborales, el cual contará con dos viceministerios técnicos que tendrán las competencias dispuestas por la LOSCCA y el Código del Trabajo, respectivamente.
- **Art. 26.-** El Frente Interno tiene la misión principal de cohesionar a la población del país en los aspectos moral, intelectual y cívico, para los fines de la Seguridad Nacional.
- **Art. 27.-** Es obligación del Frente Interno asesorar al Presidente de la República y al Consejo de Seguridad Nacional, sobre las políticas orientadas a salvaguardar y enaltecer los valores nacionales, propiciando el mejoramiento cultural, biológico y social del hombre ecuatoriano.
- **Art. 28.-** El Frente Interno prestará su colaboración a los demás Frentes, para el cumplimiento de las siguientes acciones en el campo de Seguridad Nacional:
- a) Cooperación para el fortalecimiento de la política exterior que garantice el prestigio, la soberanía, la independencia y la integridad territorial de la República;



- b) Apoyo al Frente Militar, mediante acciones que garanticen el respeto a las Fuerzas Armadas y su prestigio, cooperando para su desarrollo y fortalecimiento en la paz, a fin de crear las condiciones favorables que permitan la consecución de los Objetivos Nacionales y la realización eficiente de la defensa militar; y,
- c) Orientación de la conciencia ciudadana y de los esfuerzos de la Nación, para que el pueblo participe y colabore en los planes de desarrollo integral del país.
- **Art. 29.** El Frente Interno cooperará con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, para el cumplimiento de lo establecido en el Art. 48, literales c) y d).
- **Art. 30.** El Frente Interno, con la colaboración de los demás Frentes de Acción de Seguridad Nacional, facilitará el cumplimiento de las medidas de previsión, preparación y ejecución de la Defensa Civil.

40.

DEL FRENTE ECONÓMICO

Art. 31.- (Reformado por el Art. 28 de la Ley 12, R.O. 82-S, 9-VI-1997).- El Frente Económico está constituido por los Ministerios de Finanzas, de Recursos Naturales y Energéticos, de Agricultura y Ganadería, de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca y de Obras Públicas y Comunicaciones. Su dirección corresponde al Ministro de Finanzas.

- Según la actual estructura ministerial establecida en el Art. 16 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, el Ministerio de Finanzas y Crédito Público es actualmente el Ministerio de Economía y Finanzas el Ministerio de Recursos Naturales y Energéticos es actualmente el Ministerio de Energía y Minas, y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones fue sustituido por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
- Mediante D.E. 475 (R.O. 132, 23-VII-2007) se ordena la escisión del Ministerio de Energía y Minas con lo cual, asumen roles independientes tanto el Ministerio de Minas y Petróleos, así como el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable.
- **Art. 32.-** El Frente Económico tiene la misión principal de organizar y fortalecer permanentemente todos los recursos económicos y financieros del país para los fines del desarrollo nacional, como base de la preparación y ejecución de la Seguridad Nacional, en orden a la consecución y mantenimiento de los Objetivos Nacionales.
- **Art. 33.** Es Obligación del Frente Económico asesorar al Presidente de la República y al Consejo de Seguridad Nacional, sobre las políticas económicas orientadas al fortalecimiento del país, tanto en la paz como en la guerra.
- **Art. 34.** El Frente Económico prestará su colaboración a los demás Frentes para el cumplimiento de las siguientes acciones en el campo de Seguridad Nacional:
- a) Orientar al Frente Externo en su labor de establecimiento e incremento de las relaciones comerciales con los demás países, así como conseguir la asistencia técnica y ayuda financiera necesaria para el desarrollo económico del país;



- b) Ejecutar los programas de desarrollo de beneficio social, para elevar el nivel de vida del pueblo y lograr el robustecimiento del Frente Interno; y,
- c) Facilitar al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas el cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 48, literal d), en lo que le corresponda.

50.

DEL FRENTE MILITAR

Art. 35.- El Frente Militar está constituido por el Ministro de Defensa Nacional y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Su dirección corresponde al Ministro del Ramo, responsable de la ejecución de la política militar y de las Fuerzas Armadas, determinada por el Presidente de la República.

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas es el máximo organismo de planificación y de dirección militar, así como de asesoramiento permanente de las políticas militar y de guerra.

Art. 36.- El Frente Militar tiene la responsabilidad y la misión principal de organizar y preparar eficientemente, desde el tiempo de paz, a las Fuerzas Armadas Nacionales y de conducirlas en caso de conflicto bélico.

Dispondrá del apoyo y esfuerzo conjunto de todos los Frentes de Acción de Seguridad Nacional.

- **Art. 37.** Es obligación del Frente Militar asesorar al Presidente de la República y al Consejo de Seguridad Nacional, en lo referente a la política militar y a la política de guerra, que permita la consecución y mantenimiento de los Objetivos Nacionales.
- **Art. 38.** Las Fuerzas Armadas constituyen el principal instrumento de acción del Frente Militar. Están destinadas a la conservación de la soberanía nacional, a la defensa de la integridad e independencia del Estado y a la garantía de su ordenamiento jurídico.

Sin menoscabo de su misión fundamental, prestarán su colaboración al desarrollo social y económico del país y en los demás aspectos concernientes a la Seguridad Nacional.

- **Art. 39.-** En el aspecto de Seguridad Interna, el Frente Militar cooperará o podrá intervenir, según el caso, con los otros organismos del Estado en el mantenimiento del orden público.
- **Art. 40.-** Corresponde al Frente Militar prever y ejecutar las medidas que deban ponerse en práctica en las Zonas de Seguridad.

60.

DE LOS MINISTERIOS DE ESTADO EN RELACIÓN CON LA SEGURIDAD NACIONAL



- **Art. 41**.- Los Ministerios como integrantes de los Frentes de Acción de Seguridad Nacional, tienen las siguientes responsabilidades:
- a) Prestar la más amplia colaboración al Director del Frente respectivo para el estudio, preparación y ejecución de los planes y programas que conciernan a Seguridad Nacional;
- b) Asesorar al Director del Frente al que se pertenecen, en los asuntos de su competencia, relacionados con Seguridad Nacional y efectuar los estudios básicos necesarios;
- c) Organizar, dirigir y vigilar las labores de las respectivas Direcciones de Planeamiento de Seguridad para el Desarrollo Nacional, de conformidad con las disposiciones de esta Ley y las que imparta el Presidente de la República a través de la Secretaría General del Consejo de Seguridad Nacional; y,
- d) Elaborar, actualizar, ejecutar y vigilar la planificación de Seguridad Nacional, que les corresponde como integrantes del Frente respectivo.

Notas:

- De conformidad con el D.E. 1046-A (R.O. 345, 26-V-2008) las funciones de la Secretaría General del Consejo de Seguridad Nacional en materia de defensa civil serán de competencia de la Secretaría Técnica de Gestión de Riesgos adscrita al Ministerio de Coordinación de Seguridad Interna y Externa.
- Mediante D.E. 42 (R.O. 31, 22-IX-2009), se cambió la denominación de la Secretaría Técnica de Gestión de Riesgos a Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.
- **Art. 42.-** Los Ministerios de Estado prestarán su colaboración a la Secretaría General del Consejo de Seguridad Nacional, para los trabajos inherentes a Seguridad Nacional.

Notas:

- De conformidad con el D.E. 1046-A (R.O. 345, 26-V-2008) las funciones de la Secretaría General del Consejo de Seguridad Nacional en materia de defensa civil serán de competencia de la Secretaría Técnica de Gestión de Riesgos adscrita al Ministerio de Coordinación de Seguridad Interna y Externa.
- Mediante D.E. 42 (R.O. 31, 22-IX-2009), se cambió la denominación de la Secretaría Técnica de Gestión de Riesgos a Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.

Sección 4a.

DE LAS DIRECCIONES DE PLANEAMIENTO DE SEGURIDAD PARA EL DESARROLLO NACIONAL

Art. 43.- Cada Ministerio, a excepción del de Defensa Nacional, contará en su organización con una Dirección de Planeamiento de Seguridad para el Desarrollo Nacional, cuyas labores serán supervisadas por el respectivo Ministro de Estado. En el campo interministerial serán coordinadas por el Director del Frente correspondiente.



- **Art. 44.** En las instituciones de derecho público y en las de derecho privado con finalidad social o pública, si se estimare necesario, a juicio del Consejo de Seguridad Nacional, se organizarán y funcionarán Comisiones de Planeamiento de Seguridad para el Desarrollo Nacional, que estarán adscritas a los Frentes de Acción afines con su función.
- **Art. 45.-** Las Direcciones y la Comisiones de Planeamiento de Seguridad para el Desarrollo Nacional funcionarán como organismos especializados de estudio, asesoramiento, planificación y organización en todos los asuntos de Seguridad Nacional que competan al Ministerio de Estado, institución o Frente de Acción al que se pertenecen.
- **Art. 46.-** Las Direcciones y las Comisiones de Planeamiento de Seguridad para el Desarrollo Nacional, cumplirán su misión ciñéndose a las directivas que reciban del Consejo de Seguridad Nacional, de los Directores de Frente y de los respectivos Ministros de Estado, en su caso.
- **Art. 47.-** Las normas de constitución y funcionamiento de las Direcciones de Planeamiento de Seguridad para el Desarrollo Nacional, se establecerán en el Reglamento. La organización y funciones de las Comisiones de Planeamiento de Seguridad para el Desarrollo Nacional, serán establecidas por el Consejo de Seguridad Nacional.

Capítulo V

DEL COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS EN RELACIÓN CON LA SEGURIDAD NACIONAL

- **Art. 48.-** Como organismo de asesoramiento permanente para la Seguridad Nacional y de dirección militar de las Fuerzas Armadas, corresponde al Comando Conjunto:
- a) Asesorar al Presidente de la República y al Director del Frente Militar en la conducción de la Política de Guerra, así como en el estudio y solución de los problemas relacionados con Seguridad Nacional;
- b) Dirigir la organización, preparación y empleo conjunto o combinado de las Fuerzas Terrestre, Naval y Aérea, a través de las respectivas Comandancias, de conformidad con las planificaciones pertinentes;
- c) Planear la organización, preparación y empleo militar de la Policía Nacional para la seguridad interna y la defensa militar del país, como Fuerza Auxiliar;
- d) Asesorar en la organización y planificación del empleo de las empresas de telecomunicaciones, transportes, construcciones y demás cuyo concurso interese a la Seguridad Nacional y particularmente a la defensa militar del país, así como de las instituciones consideradas como paramilitares;
- e) Proponer la delimitación de los siguientes espacios geográficos nacionales:
- 1) En el espacio terrestre: Zonas de Seguridad y Áreas Reservadas;
- 2) En el espacio marítimo: Aguas Reservadas; y,
- 3) En el espacio aéreo: Áreas Prohibidas y Áreas Restringidas.



- **Art. 49.** En lo concerniente a la Seguridad y Defensa Nacionales, emitirá informes para conocimiento del Consejo de Seguridad Nacional, sobre los siguientes asuntos:
- a) Convenios internacionales de carácter político-territorial;
- b) Aspectos de que tratan los Arts. 50 y 51;
- c) Aspectos relacionados con convenios de integración fronteriza y sus programas;
- d) Proyectos de construcción de vías terrestres, puertos y aeropuertos y sistemas de comunicaciones;
- e) Permisos y contratos para exploración y explotación de hidrocarburos; trazado de oleoductos y gasoductos; ubicación de refinerías y de instalaciones industriales de hidrocarburos y petroquímicas; y,
- f) Permisos y contratos para exploración y explotación de minerales o materias primas estratégicas.

Capítulo VI REGULACIONES ESPECIALES PARA LOS EXTRANJEROS

Art. 50.- (Suprimido por el Art. 157 del Decreto Ley 2000-1, R.O. 144-S, 18-VIII-2000).

Art. 51.- (Suprimido por el Art. 157 del Decreto Ley 2000-1, R.O. 144-S, 18-VIII-2000).

Título II DE LA MOVILIZACIÓN NACIONAL

Capítulo I GENERALIDADES

- **Art. 52**.- El Presidente de la República establecerá la política de movilización que permita la transformación o paso de la organización y actividades de tiempo de paz a la organización y actividades de tiempo de guerra u otras emergencias nacionales.
- Art. 53.- La planificación de la Movilización abarcará los cuatro Frentes de Acción de Seguridad Nacional y será elaborada en tiempo de paz con el objeto de adecuar el Poder Nacional al esfuerzo de la guerra, como uno de los medios para lograr los Objetivos Nacionales; con este fin, los organismos de movilización adoptarán las medidas que sean necesarias para la adecuación ordenada, rápida y segura de los recursos movilizables del país.
- **Art. 54.** Son objeto de movilización las personas y toda clase de bienes y servicios; empresas, industrias, alojamiento; y, en general, todos los elementos que puedan contribuir a las finalidades de la Seguridad Nacional.

La movilización nacional podrá ser total o parcial, en forma pública o secreta. La total, por



su carácter general, no tendrá más limitaciones que las impuestas en el decreto de movilización.

La movilización parcial se decretará en razón de la limitación de las personas, de bienes y servicios o de la extensión territorial que abarque.

Art. 55.- Todo ecuatoriano y extranjero residente, sin distinción de sexo o condición, comprendido entre los 18 y 60 años de edad, está obligado a prestar sus servicios individuales para los fines de movilización.

Puede también alcanzar esta obligación, en ciertos casos, a personas mayores de 60 años.

Decretada la movilización, las personas a que se refiere el inciso anterior, tienen el deber de presentarse a la autoridad y organismos determinados en el decreto correspondiente.

Todos los recursos nacionales, públicos o privados, podrán ser movilizados para satisfacer las necesidades de la Defensa Nacional.

La movilización nacional comprende la movilización militar, la civil y la económica y abarca todos los aspectos de la actividad nacional.

Art. 56.- La responsabilidad en materia de movilización corresponde:

- a) Al Presidente de la República;
- b) A la Dirección Nacional de Movilización;
- c) A los Directores de los Frentes de Acción de Seguridad Nacional.
- d) Al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas; y,
- e) A las Unidades de Movilización de las Direcciones de Planeamiento de Seguridad para el Desarrollo Nacional.

Capítulo II

DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EN RELACIÓN CON LA MOVILIZACIÓN NACIONAL

- **Art. 57.** El Presidente de la República dispondrá, para los fines de movilización, las siguientes acciones:
- a) Levantamiento de censos especiales;
- b) Ejecución de trabajos y prácticas destinadas a preparar la movilización, pudiendo utilizar los servicios de toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera;
- c) Emitir directivas por sí mismo, o a través de los organismos responsables de la



movilización; y,

- d) Creación de nuevos organismos de movilización, modificación o ampliación de los existentes, a propuesta de los organismos de asesoramiento de Seguridad Nacional.
- **Art. 58**.- El Presidente de la República podrá decretar la movilización de uno o más Frentes de Acción de Seguridad Nacional en caso de inminente agresión externa, de guerra internacional, de grave conmoción o catástrofe interna.
- **Art. 59.** Cuando cesen las causas que motivaron la movilización, el Presidente de la República decretará la Desmovilización.

Los organismos técnicos correspondientes planificarán y regularán el proceso de desmovilización.

Capítulo III

DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD NACIONAL EN MATERIA DE MOVILIZACIÓN

Art. 60.- El Consejo de Seguridad Nacional recomendará las directivas necesarias para la preparación y ejecución de la movilización de los Frentes de Acción de Seguridad Nacional.

Para la movilización del Frente Militar contará además con el personal determinado en los literales c) y d) del Art. 48.

- **Art. 61.-** Las misiones y atribuciones que sobre movilización correspondan a los Directores de los Frentes de Acción de Seguridad Nacional, estarán fijadas en el Plan Nacional de Movilización.
- **Art. 62.-** La Dirección Nacional de Movilización dirigirá, planificará y coordinará la preparación y ejecución de la movilización; así como también asesorará al Presidente de la República por intermedio de la Secretaría General del Consejo de Seguridad Nacional, especialmente en los casos contemplados en el Art. 58.

- De conformidad con el D.E. 1046-A (R.O. 345, 26-V-2008) las funciones de la Secretaría General del Consejo de Seguridad Nacional en materia de defensa civil serán de competencia de la Secretaría Técnica de Gestión de Riesgos adscrita al Ministerio de Coordinación de Seguridad Interna y Externa.
- Mediante D.E. 42 (R.O. 31, 22-IX-2009), se cambió la denominación de la Secretaría Técnica de Gestión de Riesgos a Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.
- **Art. 63.-** La movilización militar será planificada y regulada por la Dirección de Movilización de las Fuerzas Armadas, coordinando sus actividades con la Dirección Nacional de Movilización, a fin de establecer las prioridades necesarias para el Frente Militar y el indispensable apoyo integral que deben prestarle los otros Frentes de Acción de Seguridad Nacional.
- **Art. 64.** La Dirección Nacional de Movilización estará integrada por funcionarios militares y civiles. El Director será un Oficial de las Fuerzas Armadas en la jerarquía de General o Coronel de Estado Mayor o su equivalente en la Fuerza Naval, nombrado por el Secretario



General del Consejo de Seguridad Nacional si estuviere en servicio pasivo, o, a pedido de éste, por el Ministro de Defensa Nacional si estuviere en servicio activo.

Notas:

- De conformidad con el D.E. 1046-A (R.O. 345, 26-V-2008) las funciones de la Secretaría General del Consejo de Seguridad Nacional en materia de defensa civil serán de competencia de la Secretaría Técnica de Gestión de Riesgos adscrita al Ministerio de Coordinación de Seguridad Interna y Externa.
- Mediante D.E. 42 (R.O. 31, 22-IX-2009), se cambió la denominación de la Secretaría Técnica de Gestión de Riesgos a Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.
- **Art. 65.-** Los Frentes de Acción de Seguridad Nacional son responsables de la planificación, preparación, dirección y ejecución de la movilización dentro del campo que a cada uno corresponda.
- **Art. 66.-** Los Directores de los Frentes de Acción, para el cumplimiento de sus misiones, se basarán en el Plan Nacional de Movilización y en las directivas emanadas del Presidente de la República.

En igual forma actuarán los organismos o entidades descentralizadas, o que no pertenezcan directamente a los Frentes.

- **Art. 67.-** Las Unidades de Movilización de las Direcciones de Planeamiento de Seguridad para el Desarrollo Nacional deberán estudiar, proponer, planificar, actualizar y ejecutar cuanto concierna a la movilización dentro del campo de su competencia, así como recopilar y proporcionar a la Dirección Nacional de Movilización, todas las informaciones que ella estime necesarias.
- **Art. 68.-** La desmovilización tiene por objeto la restitución ordenada y gradual del país a sus actividades normales de tiempo de paz.
- **Art. 69.** Corresponde a la Dirección Nacional de Movilización, en cooperación con los Frentes de Acción de Seguridad Nacional, especialmente con el Militar, adoptar las medidas que fueren del caso con referencia a la desmovilización.
- **Art. 70.** Los derechos y obligaciones del personal movilizado se determinarán en el Reglamento.

Capítulo IV

DE LA REQUISICIÓN Y UTILIZACIÓN DE SERVICIOS INDIVIDUALES Y COLECTIVOS

- **Art. 71.** Para el cumplimiento de la movilización, en los casos de guerra o en los de emergencia, el Presidente de la República podrá disponer la requisición de bienes patrimoniales existentes en todo o parte del territorio nacional, pertenecientes a personas jurídicas o naturales de cualquier índole, sin indemnización previa y por el lapso que se fije para servir expresamente a los propósitos de la Seguridad Nacional.
- **Art. 72.-** Para el cumplimiento de los fines previstos en el Art. anterior, el Presidente de la República podrá ordenar la prestación de servicios y la requisición y utilización de bienes, en los siguientes términos:



- a) Los servicios individuales o colectivos de las personas obligadas por el Art. 3;
- b) Los bienes inmuebles o muebles, inclusive semovientes que se hallaren en el territorio nacional, sean o no propietarios ecuatorianos, con excepción de los que estén protegidos por inmunidad diplomática; y,
- c) Las patentes de invención y licencias de explotación concedidas, así como cualquier invento útil a la Seguridad Nacional.

Para toda prestación de servicios, individuales o colectivos, y para toda requisición de bienes, mediará orden escrita de autoridad legalmente responsable, en la cual se determinará la naturaleza de la prestación y la duración probable de ella.

En caso de requisición de bienes será obligación de las autoridades competentes conferir a los propietarios el correspondiente comprobante, en el que se hará constar la clase, el estado de uso y el valor de los bienes, a objeto de las indemnizaciones de Ley.

Art. 73.- En los casos de emergencia que justifiquen la requisición, será dispuesta por la autoridad militar de mayor jerarquía del lugar en donde haya acaecido el hecho que la motivó, sin perjuicio de que sea ratificada posteriormente de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 71.

Art. 74.- La prestación de servicios individuales y colectivos, en orden a la movilización, será obligatoria para todos los ecuatorianos y extranjeros domiciliados en el país, sean personas naturales o jurídicas.

Se aceptarán excepciones en los casos previstos por el Derecho Internacional, cuando existiere imposibilidad física o mental comprobada o por las circunstancias expresamente contempladas en el Reglamento correspondiente.

Art. 75.- Toda requisición da derecho a una indemnización por parte del Estado, equivalente al justo valor del servicio de los bienes o a su precio según el costo estimado al momento de ser requisados.

El Reglamento determinará la forma y el plazo para el pago de estas indemnizaciones.

Art. 76.- Terminada la emergencia, se restituirán los bienes requisados y se indemnizará a sus poseedores de acuerdo a lo que se especifica en el Art. anterior.

Art. 77.- La Dirección Nacional de Movilización elaborará los Reglamentos de Movilización y de Requisición, los mismos que serán aprobados por Decreto Ejecutivo.

La Ley de Servicio Militar y Trabajo Obligatorio en las Fuerzas Armadas Nacionales y las demás pertinentes, complementarán las disposiciones de la movilización constantes en la presente Ley, en el Reglamento General y en los Reglamentos de Movilización y Requisición.



La Ley de Servicio Militar y Trabajo Obligatorio corresponde actualmente a la Ley de Servicio Militar Obligatorio en las Fuerzas Armadas.

Capítulo V DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LA MOVILIZACIÓN NACIONAL

Art. 78.- El Patrimonio de la Dirección Nacional de Movilización estará integrado por:

- a) Los recursos ordinarios o extraordinarios que le asignen en el Presupuesto del Gobierno Nacional o por otras leyes;
- b) Los ingresos que obtuviere por concepto de las multas estipuladas en esta Ley; y,
- c) Otros ingresos.
- **Art. 79.** Para los gastos que demande el funcionamiento normal de la Dirección Nacional de Movilización, se expedirá un Presupuesto Especial que será aprobado por el Comité Nacional de Presupuesto, previo informe favorable del Secretario General del Consejo de Seguridad Nacional.

Notas:

- De conformidad con el D.E. 1046-A (R.O. 345, 26-V-2008) las funciones de la Secretaría General del Consejo de Seguridad Nacional en materia de defensa civil serán de competencia de la Secretaría Técnica de Gestión de Riesgos adscrita al Ministerio de Coordinación de Seguridad Interna y Externa.
- Mediante D.E. 42 (R.O. 31, 22-IX-2009), se cambió la denominación de la Secretaría Técnica de Gestión de Riesgos a Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.
- **Art. 80.-** (Reformado por el Art. 1 de la Ley 2003-7, R.O. 100, 10-VI-2003).- Para afrontar los gastos de previsión y contingencia, la Dirección Nacional de Movilización contará con un Fondo de Contingencias, el mismo que se mantendrá en el Banco Central en una cuenta reservada denominada "Fondo de Contingencias para Movilización Nacional."

Este fondo se alimentará con una asignación anual de por lo menos USD \$ 20.000,00 (veinte mil dólares), que se harán constar en el Presupuesto del Gobierno Nacional, y con los ingresos que se obtuviere por concepto de multas y otros recursos.

Art. 81.- El Fondo de Contingencias será utilizado como base para la realización de acciones de previsión y de ejecución de la movilización, mediante normas que se fijarán en el Reglamento Especial. Según la necesidad el Fondo será incrementado por disposición de la Presidencia de la República.

Título III DE LA DEFENSA CIVIL

Capítulo I GENERALIDADES



- **Art. 82.-** La Defensa Civil es una actividad de servicio permanente del Estado en favor de la comunidad, que tiende a desarrollar y coordinar las medidas de todo orden destinadas a predecir y prevenir desastres de cualquier origen; a limitar y reducir los daños que tales desastres pudiesen causar a personas y bienes; así como a realizar en las zonas afectadas, las acciones de emergencia para permitir la continuidad del régimen administrativo y funcional en todos los órdenes de actividad.
- **Art. 83.** Los habitantes del Ecuador, varones comprendidos entre los 18 y 60 años de edad que no se hallen sujetos al cumplimiento de obligaciones militares, y las mujeres comprendidas entre los 18 y 50 años de edad, están obligados a prestar sus servicios en la Defensa Civil cuando fueren requeridos para prevenir, reparar o reducir los efectos de desastres de índole nacional de cualquier origen o de su amenaza.
- **Art. 84.-** Los ecuatorianos que cumplan 19 años de edad y que habiéndose presentado al sorteo no hubieren sido favorecidos de acuerdo a la Ley y Reglamento de Servicio Militar y Trabajo Obligatorio en las Fuerzas Armadas, integrarán las Unidades Auxiliares de la Defensa Civil en el lugar de su residencia, de acuerdo a llamamiento por el tiempo y la forma establecida en el Reglamento.

Al término de su servicio en las Unidades Auxiliares, recibirán un Certificado de Defensa Civil, que servirá para que la Dirección de Movilización Militar les otorgue el comprobante de conscripción correspondiente.

Nota:

La Ley de Servicio Militar y Trabajo Obligatorio corresponde actualmente a la Ley de Servicio Militar Obligatorio en las Fuerzas Armadas.

Art. 85.- (Sustituido por el Art. 1 de la Ley Reformatoria de la Ley de Seguridad Nacional, R.O. 769-S, 29-VIII-1995).- Dentro de sus respectivas jurisdicciones territoriales, los organismos del Estado, fiscales, provinciales y municipales están obligados a cumplir las disposiciones impartidas por la Defensa Civil, y sus autoridades o representantes serán civil y penalmente responsables por las consecuencias del incumplimiento de las medidas y previsiones ordenadas en las leyes, reglamentos y directivas pertinentes.

Art. 86.- La Secretaría General del Consejo de Seguridad Nacional orientará y coordinará las acciones de Defensa Civil con las específicas de Movilización y las de cada uno de los Frentes de Acción de Seguridad Nacional.

Notas:

- De conformidad con el D.E. 1046-A (R.O. 345, 26-V-2008) las funciones de la Secretaría General del Consejo de Seguridad Nacional en materia de defensa civil serán de competencia de la Secretaría Técnica de Gestión de Riesgos adscrita al Ministerio de Coordinación de Seguridad Interna y Externa.
- Mediante D.E. 42 (R.O. 31, 22-IX-2009), se cambió la denominación de la Secretaría Técnica de Gestión de Riesgos a Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.

Capítulo II DEL SISTEMA NACIONAL DE DEFENSA CIVIL



(Agregado por el Art. 2 de la Ley Reformatoria de la Ley de Seguridad Nacional, R.O. 769-S, 29-VIII-95)

Art. ... - El Sistema Nacional de Defensa Civil es el conjunto de organismos y organizaciones de los sectores público y privado, nacional, provincial, municipal, parroquial y barrial que mediante la coordinación integrada, ejecutan acciones permanentes de protección a la población y sus bienes; antes, durante y después de un desastre originado por fenómenos de la naturaleza o por efectos derivados de la intervención del hombre.

Capítulo II DE LOS ORGANISMOS DE DEFENSA CIVIL

Art. 87.- La estructura de Defensa Civil está constituida por los siguientes organismos:

a) La Dirección Nacional de Defensa Civil;

- De conformidad con el D.E. 1046-A (R.O. 345, 26-V-2008) la Dirección Nacional de Defensa Civil fue reorganizada mediante la figura de Secretaría Técnica de Gestión de Riesgos adscrita al Ministerio de Coordinación de Seguridad Interna y Externa. Asume por tanto, todas sus competencias, atribuciones, funciones, representaciones y delegaciones constantes en leyes, reglamentos y demás instrumentos normativos.
- Mediante D.E. 42 (R.O. 31, 22-IX-2009), se cambió la denominación de la Secretaría Técnica de Gestión de Riesgos a Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.
- b) Las Juntas Provinciales;
- c) Las Jefaturas Cantonales y Parroquiales;
- d) Las Unidades de Defensa Civil de las Direcciones de Planeamiento de Seguridad para el Desarrollo Nacional; y,
- e) Las Jefaturas en Zonas Especiales y más organismos que se crearen de acuerdo con las necesidades.
- **Art. ... -** (Sustitutivo de los Arts. 88 y 89, agregado por el Art. 3 de la Ley Reformatoria de la Ley de Seguridad Nacional, R.O. 769-S, 29-VIII-1995).- La Dirección Nacional de Defensa Civil es un organismo permanente de trabajo, planificación, coordinación y supervisión del Sistema Nacional de Defensa Civil y estará representada por el Director Nacional. Para efectos contractuales, gozará de personería jurídica, de acuerdo con la Ley.
- La Dirección Nacional contará con dependencias técnicas y administrativas para el cumplimiento de los fines que determinan la Ley y su Reglamento.
- El Director Nacional de Defensa Civil será un Oficial de las Fuerzas Armadas en la jerarquía



de General o Coronel de Estado Mayor o su equivalente en la Fuerza Naval, nombrado por el Secretario General del Consejo de Seguridad Nacional, si estuviere en servicio pasivo; o, a pedido de éste, por el Ministro de Defensa Nacional, si estuviere en servicio activo.

Notas:

- De conformidad con el D.E. 1046-A (R.O. 345, 26-V-2008) la Dirección Nacional de Defensa Civil fue reorganizada mediante la figura de Secretaría Técnica de Gestión de Riesgos adscrita al Ministerio de Coordinación de Seguridad Interna y Externa. Asume por tanto, todas sus competencias, atribuciones, funciones, representaciones y delegaciones constantes en leyes, reglamentos y demás instrumentos normativos.
- Mediante D.E. 42 (R.O. 31, 22-IX-2009), se cambió la denominación de la Secretaría Técnica de Gestión de Riesgos a Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.
- **Art. 90.-** Las Jefaturas en las Zonas Especiales de Defensa Civil se conformarán de acuerdo a directivas emanadas de la Dirección Nacional de Defensa Civil.

Notas:

- De conformidad con el D.E. 1046-A (R.O. 345, 26-V-2008) la Dirección Nacional de Defensa Civil fue reorganizada mediante la figura de Secretaría Técnica de Gestión de Riesgos adscrita al Ministerio de Coordinación de Seguridad Interna y Externa. Asume por tanto, todas sus competencias, atribuciones, funciones, representaciones y delegaciones constantes en leyes, reglamentos y demás instrumentos normativos.
- Mediante D.E. 42 (R.O. 31, 22-IX-2009), se cambió la denominación de la Secretaría Técnica de Gestión de Riesgos a Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.
- **Art. 91.-** Las Juntas Provinciales son organismos de planeamiento, asesoramiento, coordinación, ejecución y supervisión en sus respectivas jurisdicciones.

Estarán integradas por:

- a) Gobernador de la Provincia, quien la presidirá. En la Provincia de Pichincha la presidirá el Subsecretario de Gobierno;
- b) Prefecto Provincial, como primer Vicepresidente;
- c) Alcalde de la capital provincial, como segundo Vicepresidente;
- d) Oficial de mayor jerarquía de cada una de las Ramas de las Fuerzas Armadas en la Provincia. En la de Pichincha, el oficial que fuere designado por el Ministro de Defensa Nacional;
- e) Oficial de mayor jerarquía de la Policía Nacional en la Provincia. En la de Pichincha, el oficial que fuere designado por el Ministro de Gobierno y Policía;
- f) Representante de la Iglesia;



g) Representantes de la Dirección Nacional de Defensa Civil;

Notas:

- De conformidad con el D.E. 1046-A (R.O. 345, 26-V-2008) la Dirección Nacional de Defensa Civil fue reorganizada mediante la figura de Secretaría Técnica de Gestión de Riesgos adscrita al Ministerio de Coordinación de Seguridad Interna y Externa. Asume por tanto, todas sus competencias, atribuciones, funciones, representaciones y delegaciones constantes en leyes, reglamentos y demás instrumentos normativos.
- Mediante D.E. 42 (R.O. 31, 22-IX-2009), se cambió la denominación de la Secretaría Técnica de Gestión de Riesgos a Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.
- h) Representantes de los Ministerios en la Provincia; e,
- i) Representantes de los medios de comunicación social.
- El Presidente de la Junta Provincial podrá disponer que se integren al organismo otras autoridades o personas que estime necesarias.
- **Art. 92.-** Las Jefaturas Cantonales y más organismos de nivel inferior, que son organismos de control y de ejecución se constituirán e integrarán conforme al Reglamento.
- Art. 93.- Las Fuerzas Armadas, en tiempo de paz, apoyarán a la Defensa Civil.
- La Policía Nacional, los Cuerpos de Bomberos y la Cruz Roja Ecuatoriana, son organismos básicos de Defensa Civil.
- **Art. 94.-** Las funciones y misiones de los organismos del Sistema a que se refiere el Art. 87, se fijarán en el Reglamento.
- Art. 95.- El personal de Defensa Civil estará integrado por:
- a) Los funcionarios y empleados de la Dirección Nacional y demás colaboradores de los organismos del Sistema;
- b) Los voluntarios que se inscriban en cualesquiera de los organismos de Defensa Civil y que cumplan con los requisitos reglamentarios; y,
- c) El personal a que se refiere el Art. 84.

Capítulo III DE LAS AUTORIDADES DE DEFENSA CIVIL

- Art. 96.- La autoridad máxima de Defensa Civil es el Presidente de la República.
- **Art. 97.-** Corresponde al Presidente de la República, a través de la Secretaría General del Consejo de Seguridad Nacional, emitir directivas a la Dirección Nacional de Defensa Civil, y dotarle de los medios y recursos necesarios a fin de que planifique y prepare la ejecución eficiente de las medidas de Defensa Civil.



Notas:

- De conformidad con el D.E. 1046-A (R.O. 345, 26-V-2008) las funciones de la Secretaría General del Consejo de Seguridad Nacional en materia de defensa civil serán de competencia de la Secretaría Técnica de Gestión de Riesgos adscrita al Ministerio de Coordinación de Seguridad Interna y Externa.
- De conformidad con el D.E. 1046-A (R.O. 345, 26-V-2008) la Dirección Nacional de Defensa Civil fue reorganizada mediante la figura de Secretaría Técnica de Gestión de Riesgos adscrita al Ministerio de Coordinación de Seguridad Interna y Externa. Asume por tanto, todas sus competencias, atribuciones, funciones, representaciones y delegaciones constantes en leyes, reglamentos y demás instrumentos normativos.
- Mediante D.E. 42 (R.O. 31, 22-IX-2009), se cambió la denominación de la Secretaría Técnica de Gestión de Riesgos a Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.
- **Art. 98.-** El campo de acción de la Defensa Civil cubre todo el territorio nacional. Podrá, sin embargo, acudir en ayuda de otros países que sufran los efectos y perjuicios de catástrofes producidas por fenómenos de la naturaleza.
- **Art. 99.** En tiempo normal y para efecto de instrucción y de adiestramiento, la Dirección Nacional, por sí o por intermedio de sus organismos dependientes, está facultada para convocar a todos los habitantes del país a que se refiere el Art. 83, o por sectores, hasta por seis horas al mes.

En casos excepcionales y por una sola vez al año, podrá disponer la realización de prácticas de Defensa Civil hasta por tres días consecutivos, previa la autorización del Presidente de la República, en forma total o por sectores.

- **Art. 100.** En el Reglamento se determinará las causas de exención al servicio en la Defensa Civil a las personas comprendidas en los Arts. 83 y 84, así como las modalidades y la naturaleza de las mismas, tomando en cuenta las circunstancias personales.
- **Art. 101.** El Presidente de la República de acuerdo a la magnitud de la catástrofe podrá declarar el estado de emergencia y decretar Zona de Emergencia, asumiendo las atribuciones que le confiere la Ley.
- **Art. 102.** Así mismo, la declaratoria de emergencia hecha por el Jefe de Estado, implica el llamamiento obligatorio a los habitantes del país comprendidos en el Art. 83, a prestar sus servicios en la Defensa Civil en los puestos que se les asignare; el Director Nacional tendrá la facultad de convocarlos parcial o totalmente, de acuerdo con las necesidades y la gravedad de la emergencia.
- **Art. 103.-** En caso de emergencias y de considerarse insuficiente el Fondo de Contingencias, el Presidente de la República podrá expedir presupuesto de emergencia, con las excepciones constitucionales y ordenar la situación de los fondos correspondientes. Cualquier sobrante incrementará la cuenta "Fondo de Contingencias para Defensa Civil".
- **Art. 104.-** En el estado de emergencia, legalmente declarado, los valores que se mantengan en el Fondo de Contingencias, así como los Fondos Extrapresupuestarios que se asignen y los bienes y dineros donados para Defensa Civil, serán dispuestos bajo la



exclusiva responsabilidad del Director Nacional, quien pasada la emergencia, rendirá un informe detallado de gastos al Secretario General del Consejo de Seguridad Nacional, y por su intermedio al Contralor General de la Nación, de acuerdo con la Ley.

Notas:

- La Contraloría General de la Nación se denomina actualmente Contraloría General del Estado.
- De conformidad con el D.E. 1046-A (R.O. 345, 26-V-2008) las funciones de la Secretaría General del Consejo de Seguridad Nacional en materia de defensa civil serán de competencia de la Secretaría Técnica de Gestión de Riesgos adscrita al Ministerio de Coordinación de Seguridad Interna y Externa.
- Mediante D.E. 42 (R.O. 31, 22-IX-2009), se cambió la denominación de la Secretaría Técnica de Gestión de Riesgos a Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.
- **Art. 105.** Cuando la emergencia haya sido declarada con motivo y ocasión de amenaza o de situaciones bélicas, Defensa Civil y todos sus organismos se subordinarán al Frente Militar.
- **Art. 106.** En el caso de catástrofes sectoriales o locales que no motivaren la declaratoria de emergencia, la Dirección Nacional actuará de inmediato aplicando los planes correspondientes y utilizando directamente los fondos de la partida "Fondo de Contingencias para Defensa Civil".
- **Art. 107.-** En el caso de haberse producido la emergencia por catástrofes nacionales, regionales o locales, todas las autoridades y organismos estatales, provinciales y municipales se someterán a las directivas de Defensa Civil, sin que proceda acatamiento de otras órdenes que no emanen del Director Nacional o de la Junta Provincial, de acuerdo a las circunstancias, en cuanto a la ejecución de los planes y directivas de Defensa Civil.
- **Art. 108.** Para la requisición, utilización de bienes y prestación de servicios con fines de Defensa Civil, se considerarán las disposiciones contenidas en el Título II, Capítulo IV, de la presente Ley.

Capítulo IV DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DE DEFENSA CIVIL

Art. 109.- El patrimonio de la Dirección Nacional de Defensa Civil estará integrado por:

- a) Los recursos ordinarios o extraordinarios que se le asignen en el Presupuesto del Gobierno Nacional o por otras Leyes;
- b) Los auxilios, donaciones, subvenciones y contribuciones provenientes de organismos públicos o de personas naturales o jurídicas, nacionales, extranjeras o internacionales con motivo de desastres;
- c) Los bienes propios de inmuebles o muebles no fungibles, adquiridos a cualquier título para fines específicos, almacenados o entregados durante la emergencia en forma



provisional a las poblaciones o zonas afectadas; y,

d) Otros ingresos.

Notas:

- De conformidad con el D.E. 1046-A (R.O. 345, 26-V-2008) la Dirección Nacional de Defensa Civil fue reorganizada mediante la figura de Secretaría Técnica de Gestión de Riesgos adscrita al Ministerio de Coordinación de Seguridad Interna y Externa. Asume por tanto, todas sus competencias, atribuciones, funciones, representaciones y delegaciones constantes en leyes, reglamentos y demás instrumentos normativos.
- Mediante D.E. 42 (R.O. 31, 22-IX-2009), se cambió la denominación de la Secretaría Técnica de Gestión de Riesgos a Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.

Art. 110.- Para los gastos que demande el funcionamiento normal de la Dirección Nacional de Defensa Civil, se expedirá un Presupuesto Especial que será aprobado por el Comité Nacional de Presupuesto, previo informe favorable del Secretario General del Consejo de Seguridad Nacional.

Notas:

- De conformidad con el D.E. 1046-A (R.O. 345, 26-V-2008) la Dirección Nacional de Defensa Civil fue reorganizada mediante la figura de Secretaría Técnica de Gestión de Riesgos adscrita al Ministerio de Coordinación de Seguridad Interna y Externa. Asume por tanto, todas sus competencias, atribuciones, funciones, representaciones y delegaciones constantes en leyes, reglamentos y demás instrumentos normativos.
- Mediante D.E. 42 (R.O. 31, 22-IX-2009), se cambió la denominación de la Secretaría Técnica de Gestión de Riesgos a Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.

Art. 111.- (Reformado por el Art. 4 de la Ley Reformatoria de la Ley de Seguridad Nacional, R.O. 769-S, 29-VIII-95).- Para afrontar los gastos de previsión y contingencias, la Dirección Nacional de Defensa Civil contará con el Fondo de Contingencias, el mismo que se mantendrá en el Banco Central en una cuenta denominada "Fondo de Contingencias para Defensa Civil".

Este Fondo se alimentará con una asignación anual de por lo menos cinco mil salarios mínimos vitales generales vigentes, que se hará constar en el Presupuesto del Gobierno Nacional y las asignaciones especiales que se realicen en los casos determinados en el Art. 103 cuyos saldos serán de carácter acumulativo.

Notas:

- De conformidad con el D.E. 1046-A (R.O. 345, 26-V-2008) la Dirección Nacional de Defensa Civil fue reorganizada mediante la figura de Secretaría Técnica de Gestión de Riesgos adscrita al Ministerio de Coordinación de Seguridad Interna y Externa. Asume por tanto, todas sus competencias, atribuciones, funciones, representaciones y delegaciones constantes en leyes, reglamentos y demás instrumentos normativos.
- Mediante D.E. 42 (R.O. 31, 22-IX-2009), se cambió la denominación de la Secretaría Técnica de Gestión de Riesgos a Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.

https://edicioneslegales.com.ec/

Pág. 26 de 66



Art. 112.- El Fondo de Contingencias será utilizado como base para la realización de obras de previsión de desastres y atención de las emergencias o catástrofes nacionales o internacionales a que deba concurrir el Ecuador; y, para los desastres de consideración que afecten a barrios o poblaciones, que no tengan la gravedad, por su magnitud o incidencia, para ser calificadas de catástrofes nacionales. Según la necesidad, será incrementado por disposición del Presidente de la República.

La ayuda a los damnificados, cuando fuere menester, se proporcionará de acuerdo a la evaluación social y económica que se realizare, y a criterio de la Dirección Nacional de Defensa Civil.

Notas:

- De conformidad con el D.E. 1046-A (R.O. 345, 26-V-2008) la Dirección Nacional de Defensa Civil fue reorganizada mediante la figura de Secretaría Técnica de Gestión de Riesgos adscrita al Ministerio de Coordinación de Seguridad Interna y Externa. Asume por tanto, todas sus competencias, atribuciones, funciones, representaciones y delegaciones constantes en leyes, reglamentos y demás instrumentos normativos.
- Mediante D.E. 42 (R.O. 31, 22-IX-2009), se cambió la denominación de la Secretaría Técnica de Gestión de Riesgos a Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.

Capítulo V DISPOSICIONES GENERALES DE DEFENSA CIVIL

Art. 113.- La Dirección Nacional de Defensa Civil organizará las Unidades Auxiliares de Defensa Civil, con la finalidad de reforzar a la Policía Nacional, Cruz Roja Ecuatoriana y Cuerpo de Bomberos, en el cumplimiento de las actividades inherentes a Defensa Civil.

Notas:

- De conformidad con el D.E. 1046-A (R.O. 345, 26-V-2008) la Dirección Nacional de Defensa Civil fue reorganizada mediante la figura de Secretaría Técnica de Gestión de Riesgos adscrita al Ministerio de Coordinación de Seguridad Interna y Externa. Asume por tanto, todas sus competencias, atribuciones, funciones, representaciones y delegaciones constantes en leyes, reglamentos y demás instrumentos normativos.
- Mediante D.E. 42 (R.O. 31, 22-IX-2009), se cambió la denominación de la Secretaría Técnica de Gestión de Riesgos a Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.

Art. 114.- Las Unidades Auxiliares de Defensa Civil se constituirán con:

- a) Los ecuatorianos calificados como idóneos para el Servicio Militar Obligatorio en las Fuerzas Armadas, que no hubieren sido favorecidos durante el proceso de selección y sorteo;
- b) Los calificados como no idóneos que estuvieren en capacidad de cumplir con las actividades compatibles con la Defensa Civil; y,



c) Los voluntarios que se inscriban en cualesquiera de los organismos de defensa civil y que cumplan con los requisitos establecidos en el Reglamento General de esta Ley.

Art. 115.- El personal de las Unidades Auxiliares que preste servicios en Defensa Civil por más de tres días consecutivos, siempre que no fueren empleados o trabajadores, podrán percibir compensaciones económicas.

Los empleados o trabajadores seguirán percibiendo los sueldos o salarios de las instituciones o personas empleadoras, de acuerdo con el Reglamento General de la presente Ley.

Art. 116.- Si las personas comprendidas en el inciso primero del Art. anterior sufrieren un accidente que les causare la muerte, lesiones o enfermedades derivadas del servicio y no tuvieren ellos o sus deudos beneficios económicos por mandato de otra Ley, el Director Nacional gestionará la correspondiente prestación de acuerdo al Reglamento y con base al salario o al sueldo mínimo impuesto para su profesión.

Tal indemnización, que se otorgará por una sola vez y nunca en forma de pensión, es un seguro estatal para los miembros de las Unidades Auxiliares no afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; los recursos necesarios se gestionarán ante la Presidencia de la República.

Para los afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el accidente será tomado como riesgo de trabajo, para todos los efectos y sin que se admita prueba en contrario.

Art. 117.- Los funerales del personal de las Unidades Auxiliares fallecidos en actos de servicio, serán abonados por la Defensa Civil, siempre que no tuvieren este beneficio en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social o en la Caja Militar.

Notas:

- La caja militar actualmente no existe. Sus funciones las realiza el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA).
- La Asamblea Nacional Constituyente por medio de la Resolución s/n (R.O. 393-S, 31-VII-2008), deroga todas las disposiciones secundarias que gravan las pensiones por vejez, invalidez y muerte, de los pensionistas del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA).
- Art. 118.- (Derogado por el Art. 126 de la Ley de Régimen Tributario Interno).
- **Art. 119.-** Se exonera a la Dirección Nacional de Defensa Civil de toda clase de timbres, impuestos fiscales, municipales y especiales, y más gravámenes a la importación de vehículos, equipos, medicinas y más artículos e implementos necesarios para Defensa Civil, destinados exclusivamente al cumplimiento de sus funciones específicas.

El Ministro de Finanzas, a pedido de la Dirección Nacional de Defensa Civil, tramitará en forma prioritaria las liberaciones de impuestos conforme al inciso anterior.



- Según la actual estructura ministerial establecida en el Art. 16 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, el Ministerio de Finanzas y Crédito Público es actualmente el Ministerio de Economía y Finanzas.
- De conformidad con el D.E. 1046-A (R.O. 345, 26-V-2008) la Dirección Nacional de Defensa Civil fue reorganizada mediante la figura de Secretaría Técnica de Gestión de Riesgos adscrita al Ministerio de Coordinación de Seguridad Interna y Externa. Asume por tanto, todas sus competencias, atribuciones, funciones, representaciones y delegaciones constantes en leyes, reglamentos y demás instrumentos normativos.
- Mediante D.E. 42 (R.O. 31, 22-IX-2009), se cambió la denominación de la Secretaría Técnica de Gestión de Riesgos a Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.
- **Art. 120.** En caso de emergencia declarada, y mientras dure ésta, podrá prescindirse de todo trámite aduanero a pedido de la Dirección Nacional de Defensa Civil, para la introducción o envío de artefactos, maquinarias, equipos, medicinas, ropa y más artículos donados para o con motivos de tales emergencias o que ingresaren temporalmente para tal fin.

En las circunstancias señaladas en el inciso anterior, se exonera además del impuesto del cuatro por ciento a las transacciones mercantiles y a la prestación de servicios.

Notas:

- El I.T.M y todas sus exenciones fue derogado por la Ley de Régimen Tributario Interno
- De conformidad con el D.E. 1046-A (R.O. 345, 26-V-2008) la Dirección Nacional de Defensa Civil fue reorganizada mediante la figura de Secretaría Técnica de Gestión de Riesgos adscrita al Ministerio de Coordinación de Seguridad Interna y Externa. Asume por tanto, todas sus competencias, atribuciones, funciones, representaciones y delegaciones constantes en leyes, reglamentos y demás instrumentos normativos.
- Mediante D.E. 42 (R.O. 31, 22-IX-2009), se cambió la denominación de la Secretaría Técnica de Gestión de Riesgos a Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.
- Art. 121.- Todo trámite, de o ante la Defensa Civil, se lo hará en papel simple.
- **Art. 122.** Los vehículos de la Dirección Nacional de Defensa Civil están exentos del pago de matrículas y rodaje; así como de peaje, pontazgo y demás gravámenes, cuando transiten en las carreteras de la República, por razones de emergencia y con prioridad en la circulación.

- De conformidad con el D.E. 1046-A (R.O. 345, 26-V-2008) la Dirección Nacional de Defensa Civil fue reorganizada mediante la figura de Secretaría Técnica de Gestión de Riesgos adscrita al Ministerio de Coordinación de Seguridad Interna y Externa. Asume por tanto, todas sus competencias, atribuciones, funciones, representaciones y delegaciones constantes en leyes, reglamentos y demás instrumentos normativos.
- Mediante D.E. 42 (R.O. 31, 22-IX-2009), se cambió la denominación de la Secretaría Técnica de Gestión de Riesgos a Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.



Art. 123.- El apoyo solicitado a las entidades de derecho público o privado o de asistencia de bienestar social, será brindado de acuerdo con las directivas de la Dirección Nacional de Defensa Civil y bajo su supervigilancia, respetándose en todo caso las leyes y estatutos propios de dichas entidades.

Notas:

- De conformidad con el D.E. 1046-A (R.O. 345, 26-V-2008) la Dirección Nacional de Defensa Civil fue reorganizada mediante la figura de Secretaría Técnica de Gestión de Riesgos adscrita al Ministerio de Coordinación de Seguridad Interna y Externa. Asume por tanto, todas sus competencias, atribuciones, funciones, representaciones y delegaciones constantes en leyes, reglamentos y demás instrumentos normativos.
- Mediante D.E. 42 (R.O. 31, 22-IX-2009), se cambió la denominación de la Secretaría Técnica de Gestión de Riesgos a Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.
- **Art. 124.-** La Dirección Nacional de Defensa Civil emitirá las directivas que deberán cumplirse con la supervisión obligatoria de los Municipios, para la construcción de edificios, urbanizaciones, casas de habitación e instalaciones en general, tendientes a garantizar la seguridad de tales obras y de la población. Sin el cumplimiento de estas directivas no podrán realizarse ni continuarse las mencionadas construcciones y cualquier transgresión a la disposición anterior, determinará las demoliciones que correspondan a cargo del propietario de esas obras.

Notas:

- De conformidad con el D.E. 1046-A (R.O. 345, 26-V-2008) la Dirección Nacional de Defensa Civil fue reorganizada mediante la figura de Secretaría Técnica de Gestión de Riesgos adscrita al Ministerio de Coordinación de Seguridad Interna y Externa. Asume por tanto, todas sus competencias, atribuciones, funciones, representaciones y delegaciones constantes en leyes, reglamentos y demás instrumentos normativos.
- Mediante D.E. 42 (R.O. 31, 22-IX-2009), se cambió la denominación de la Secretaría Técnica de Gestión de Riesgos a Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.
- **Art. 125.** En las movilizaciones masivas que puedan devenir en desastre, la Dirección Nacional de Defensa Civil impartirá normas obligatorias a la autoridad correspondiente, sin cuyo cumplimiento no podrá ser autorizada su realización.

- De conformidad con el D.E. 1046-A (R.O. 345, 26-V-2008) la Dirección Nacional de Defensa Civil fue reorganizada mediante la figura de Secretaría Técnica de Gestión de Riesgos adscrita al Ministerio de Coordinación de Seguridad Interna y Externa. Asume por tanto, todas sus competencias, atribuciones, funciones, representaciones y delegaciones constantes en leyes, reglamentos y demás instrumentos normativos.
- Mediante D.E. 42 (R.O. 31, 22-IX-2009), se cambió la denominación de la Secretaría Técnica de Gestión de Riesgos a Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.
- **Art. 126.-** Las Misiones Diplomáticas o las Oficinas Consulares acreditadas en el exterior podrán ser autorizadas para recibir auxilios o donaciones para Defensa Civil. Lo propio, la



Pág. 31 de 66

cadena de bancos oficiales o privados existentes en el país. Para este efecto, en el primer caso, el Ministerio de Relaciones Exteriores impartirá las instrucciones necesarias para la recepción e inmediata remisión de dichos auxilios o donaciones; y, en el segundo caso, la Superintendencia de Bancos emitirá las directivas oportunas para la apertura y mantenimiento de cuentas corrientes especiales, cuyos saldos se transferirán mensual y automáticamente a la cuenta "Fondo de Contingencias para Defensa Civil", Banco Central.

Nota:

Según la actual estructura ministerial establecida en el Art. 16 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, el Ministerio de Relaciones Exteriores es actualmente Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración.

- **Art. 127.-** Cuando las autoridades, los radioaficionados o los diversos medios de información colectiva detectaren informaciones sobre riesgos o amenaza de desastres o sobre el acontecimiento en sí, deberán comunicarse inmediatamente con el organismo local de Defensa Civil, sin cuya autorización expresa no podrán publicar noticias que causen pánico en la población. Su incumplimiento será penado de acuerdo a la respectiva disposición legal.
- **Art. 128.-** Los boletines oficiales informativos de Defensa Civil, serán obligatoria y gratuitamente publicados en los medios de información colectiva.
- **Art. 129.** Los cargos de las Juntas Provinciales, Jefaturas Cantonales y Parroquiales y más niveles inferiores son honoríficos. Sin embargo, los funcionarios de Defensa Civil podrán percibir viáticos de acuerdo con la Ley.
- **Art. 130.** La participación y misiones de los Frentes de Acción de Seguridad Nacional en orden a Defensa Civil, así como de las instituciones de derecho público y privado, de los organismos nacionales o extranjeros que operen en el país en el campo de la asistencia y, en general, de los ciudadanos, constarán en el Plan Nacional de Defensa Civil.
- **Art. 131.** El Ministerio de Educación Pública introducirá en sus planes educacionales de nivel primario y secundario, información relativa a la doctrina y práctica de Defensa Civil.

Nota:

- Según la actual estructura ministerial establecida en el Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, el Ministerio de Educación Pública es actualmente el Ministerio de Educación.
- **Art. 132.** Para ejecutar las disposiciones de este Título, la Dirección Nacional podrá emitir, enmendar o derogar las directivas o reglamentos internos, con la aprobación expresa del Secretario General del Consejo de Seguridad Nacional.

Notas:

https://edicioneslegales.com.ec/

- De conformidad con el D.E. 1046-A (R.O. 345, 26-V-2008) las funciones de la Secretaría General del Consejo de Seguridad Nacional en materia de defensa civil serán de competencia de la Secretaría Técnica de Gestión de Riesgos adscrita al Ministerio de Coordinación de Seguridad Interna y Externa.
- Mediante D.E. 42 (R.O. 31, 22-IX-2009), se cambió la denominación de la Secretaría Técnica de Gestión de Riesgos a Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.



Título IV DE LAS INFRACCIONES Y SU JUZGAMIENTO

Capítulo I DE LAS INFRACCIONES

- **Art. 133.** Será sancionada con prisión de 10 a 30 días y multa de 200 a 500 sucres quien no cumpliere las tareas o misiones específicas que de conformidad con el Art. 3 se le asignaren.
- **Art. 134.** Quien requerido, omitiere los datos necesarios para el levantamiento de los censos, previstos en el Art. 57, literal a), será sancionado con prisión de 10 a 30 días y multa de 200 a 2.000 sucres.
- **Art. 135.-** Será sancionado con prisión de uno a tres años, el funcionario o empleado que faltare a la reserva debida, respecto de datos que hubieren sido proporcionados para realizar acciones que se dispusieren de conformidad con los Arts. 3 y 57.
- **Art. 136.-** Será sancionado con prisión de uno a dos años, quien atentare contra la Seguridad Nacional, revelando datos que deben mantenerse en reserva.

Si el infractor fuese funcionario, empleado público, administrador o representante legal de una persona jurídica que tenga contrato con el Estado, será sancionado con reclusión menor ordinaria de tres a seis años.

Si la divulgación fuese hecha en país extranjero o se proporcionaren los datos a los agentes de aquél, se impondrá al responsable la pena de reclusión mayor extraordinaria.

Art. 137.- Será sancionado con prisión de uno a dos años, quien sustrajere documento calificado; o encontrándolo, no lo entregare a la oficina correspondiente; o devolviéndolo, guardare copia o reprodujere su contenido.

Si la divulgación fuese hecha en país extranjero o se entregare el documento a los agentes de aquél, se impondrá la pena de reclusión mayor extraordinaria.

Art. 138.- Será sancionado con prisión de uno a tres años, quien destruyere, ocultare o dañare bienes inmuebles o muebles para impedir u obstaculizar la movilización.

En caso de guerra, la pena será la de reclusión menor ordinaria de tres a seis años.

Si estos actos se efectuaren para favorecer a un país extranjero, se reprimirán con reclusión mayor extraordinaria.

Art. 139.- Quien, una vez decretada la movilización, no cumpliere las órdenes impartidas al efecto, será sancionado con prisión de tres meses a un año, sin perjuicio de que observe la orden o preste el servicio requerido.

En caso de guerra, la pena será de reclusión ordinaria de tres a seis años.



Art. 140.- Quien obstare o se opusiere a las acciones de requisición, será sancionado con prisión de tres meses y el comiso de los bienes materia de la misma.

En caso de guerra, la pena será de uno a dos años de prisión y el comiso correspondiente.

- Art. 141.- La reincidencia será reprimida con el máximo de la pena.
- **Art. 142.-** En tratándose de persona jurídica, el responsable de la infracción será el administrador o el representante legal, según el caso.

Capítulo II DEL JUZGAMIENTO

- **Art. 143.** (Derogado por la Disposición Reformatoria Décimo Quinta de la Ley s/n, R.O. 544-S, 9-III-2009).
- **Art. 144.** En tiempo de paz, las infracciones determinadas en esta Ley serán juzgadas por los respectivos jueces atendiendo al fuero del infractor, de conformidad con lo dispuesto en los Códigos de Procedimiento Penal.
- Art. 145.- En tiempo de guerra o decretada la movilización las infracciones puntualizadas en el Capítulo anterior, serán juzgadas con sujeción a lo dispuesto en el Código Penal Militar, y no se reconocerá fuero alguno.

Nota:

El texto resaltado en negrillas ha sido declarado inconstitucional por la Res. 0042-2007-TC (R.O. 371-S, 1-VII-2008).

- **Art. 146.** Declarado el Estado de Emergencia, el Presidente de la República, mediante Decreto, podrá delegar el ejercicio de las facultades extraordinarias previstas en la Constitución a las Autoridades Civiles y Militares que él precise para el efecto. Estas autoridades previamente al ejercicio de las facultades que así recibieren, emitirán los respectivos Bandos y los divulgarán por los medios de comunicación colectiva.
- Art. 147.- Declarado el Estado de Emergencia, las infracciones sancionadas con reclusión, serán juzgadas con arreglo al Art. 145.

Nota:

El texto resaltado en negrillas ha sido declarado inconstitucional por la Res. 0042-2007-TC (R.O. 371-S, 1-VII-2008).

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- Derógase las leyes, decretos y disposiciones que se opongan a esta Ley. Por lo mismo, sus disposiciones prevalecerán sobre las que se le opongan.

SEGUNDA.- Esta codificación, verificada por la Secretaría General del Consejo de Seguridad Nacional, tendrá fuerza obligatoria de acuerdo con lo dispuesto por la Primera Disposición Transitoria del Decreto Supremo No. 3644-A de 20 de Julio de 1979, promulgado en el Registro Oficial No. 887 de 2 de Agosto del mismo año. Publíquese esta codificación en el Registro Oficial y cítese en adelante, su nueva numeración.



Notas:

- De conformidad con el D.E. 1046-A (R.O. 345, 26-V-2008) las funciones de la Secretaría General del Consejo de Seguridad Nacional en materia de defensa civil serán de competencia de la Secretaría Técnica de Gestión de Riesgos adscrita al Ministerio de Coordinación de Seguridad Interna y Externa.
- Mediante D.E. 42 (R.O. 31, 22-IX-2009), se cambió la denominación de la Secretaría Técnica de Gestión de Riesgos a Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.

FUENTES DE LA PRESENTE EDICIÓN DE LA LEY DE SEGURIDAD NACIONAL

- 1.- Ley 275, Codificación (Registro Oficial 892, 9-VIII-1979)
- 2.- Ley s/n (Suplemento del Registro Oficial 769, 29-VIII-1995)
- 3.- Ley 12, Art. 28 (Suplemento del Registro Oficial 82, 9-VI-1997)
- 4.- Ley 98-12 (Suplemento del Registro Oficial 20, 7-IX-1998)
- 5.- Decreto Ley 2000-1 (Suplemento del Registro Oficial 144, 18-VIII-2000)
- 6.- Ley 2003-7 (Registro Oficial 100, 10-VI-2003)
- 7.- Resolución 0042-2007-TC (Suplemento del Registro Oficial 371, 1-VII-2008)
- 8.- Ley s/n (Suplemento del Registro Oficial 544, 9-III-2009).

EL PLENO DE LA ASAMBLEA NACIONAL

Considerando:

Que, se requiere promover una sociedad que logre bienestar, buen vivir y desarrollo integral, con un Estado que asume sus responsabilidades y una sociedad activa que coadyuva a estas metas, para lo cual son necesarias poner en marcha diversos tipos de seguridad que garantiza el Estado y que están comprendidos en la seguridad pública;

Que, la seguridad humana está mejor garantizada en un orden social que nace de una sociedad con condiciones para hacer efectivos los derechos, el pluralismo cultural, político

https://edicioneslegales.com.ec/



y social que permitan la convivencia entre las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos, lo cual constituye una de las metas de la seguridad, de conformidad con el artículo 1 de la Constitución;

Que, según el número 8 del artículo 3 de la Constitución de la República es deber primordial del Estado garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción;

Que, el artículo 389 de la Constitución de la República señala que es deber del Estado proteger a las personas, las colectividades y la naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de origen natural o antrópico mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y mantenimiento de las condiciones sociales, económicas y ambientales, con el objeto de minimizar la condición de vulnerabilidad;

Que, conforme al artículo 393 de la Constitución de la República, el Estado debe garantizar la seguridad humana a través de políticas y acciones integradas, para prevenir las formas de violencia y discriminación, para lo cual se encargará a órganos especializados en los diferentes niveles de gobierno la planificación y aplicación de estas políticas;

Que, es necesario articular los distintos organismos que conforman los sistemas establecidos en la Constitución y la ley con los organismos de derecho privado para alcanzar eficiencia, eficacia y efectividad en las políticas públicas orientadas al buen vivir;

Que, es necesario renovar la doctrina de seguridad para adaptarla a las demandas del mundo contemporáneo, al marco constitucional vigente, siendo menester contar con un nuevo Sistema de Seguridad Integral bajo una óptica civilista, dinámica y adecuada para el nuevo entorno geopolítico internacional;

Que, el número 11 de la Disposición Transitoria Primera de la Constitución de la República, dispone que, en el plazo de trescientos sesenta días desde que esta entró en vigencia, debe aprobarse una ley que regule la seguridad pública y del Estado; y,

En uso de la atribución que le confiere el número 6 del artículo 120 de la Constitución de la República, expide la siguiente:

LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DEL ESTADO.

Título I DEL OBJETO Y ÁMBITO DE LA LEY

Art. 1.- Del objeto de la ley.- La presente ley tiene por objeto regular la seguridad integral del Estado democrático de derechos y justicia y todos los habitantes del Ecuador, garantizando el orden público, la convivencia, la paz y el buen vivir, en el marco de sus derechos y deberes como personas naturales y jurídicas, comunidades, pueblos,



nacionalidades y colectivos, asegurando la defensa nacional, previniendo los riesgos y amenazas de todo orden, a través del Sistema de Seguridad Pública y del Estado.

El Estado protegerá a las ecuatorianas y a los ecuatorianos que residan o estén domiciliados en el exterior, conforme lo previsto en la Constitución de la República, los tratados internacionales y la ley.

Art. 2.- De los ámbitos de la ley.- Al amparo de esta ley se establecerán e implementarán políticas, planes, estrategias y acciones oportunas para garantizar la soberanía e integridad territorial, la seguridad de las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos, e instituciones, la convivencia ciudadana de una manera integral, multidimensional, permanente, la complementariedad entre lo público y lo privado, la iniciativa y aporte ciudadanos, y se establecerán estrategias de prevención para tiempos de crisis o grave conmoción social.

Se protegerá el patrimonio cultural, la diversidad biológica, los recursos genéticos, los recursos naturales, la calidad de vida ciudadana, la soberanía alimentaria; y en el ámbito de la seguridad del Estado la protección y control de los riesgos tecnológicos y científicos, la tecnología e industria militar, el material bélico, tenencia y porte de armas, materiales, sustancias biológicas y radioactivas, etc.

INICIO CONCORDANCIA			
Concordancia(s):			
<u>H-Art. 1</u>			
Constitución de la República del Ecuador: Art. 3			
Art. 11 Art. 393			
FIN CONCORDANCIA			

Art. 3.- De la garantía de seguridad pública.- Es deber del Estado promover y garantizar la seguridad de todos los habitantes, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos del Ecuador, y de la estructura del Estado, a través del Sistema de Seguridad Pública y del Estado, responsable de la seguridad pública y del Estado con el fin de coadyuvar al bienestar colectivo, al desarrollo integral, al ejercicio pleno de los derechos humanos y de los derechos y garantías constitucionales.

INICIO CONCORDANCIA	



Concordancia(s):

H-Art. 3.-

Constitución de la República del Ecuador: Art. 147, num. 17.-Art. 163.-

FIN CONCORDANCIA

Título II DE LOS PRINCIPIOS

- Art. 4.- De los principios de la seguridad pública y del Estado.- La seguridad pública y del Estado se sujetará a los derechos y garantías establecidos en la Constitución de la República, los tratados internacionales de derechos humanos, y se guiará por los siguientes principios:
- a) Integralidad.- La seguridad pública será integral para todos los habitantes del Ecuador, comunidades, pueblos, nacionalidades, colectivos, para la sociedad en su conjunto, las instituciones públicas y privadas, y comprende acciones conjugadas de prevención, protección, defensa y sanción. Así, se prevendrán los riesgos y amenazas que atenten contra la convivencia, la seguridad de los habitantes y del Estado y el desarrollo del país; se protegerá la convivencia y seguridad ciudadanas, se defenderá la soberanía y la integridad territorial; se sancionarán las acciones y omisiones que atenten a la seguridad pública y del Estado;
- b) Complementariedad.- La seguridad pública es responsabilidad del Estado, que promoverá un orden social democrático que asegure la convivencia pacífica, con la participación y veeduría ciudadana para el mantenimiento de la paz;
- c) Prioridad y oportunidad.- El Estado en sus planes y acciones de seguridad, dará prioridad a la prevención basada en la prospección y en medidas oportunas en casos de riesgos de cualquier tipo;
- d) Proporcionalidad.- Las acciones de seguridad y la asignación de recursos serán proporcionales a las necesidades de prevención y protección, y a la magnitud y trascendencia de los factores que atenten contra la seguridad de los habitantes y del Estado;
- e) Prevalencia.- Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos y las



garantías constitucionales de los habitantes, comunidades, pueblos, nacionalidades, colectivos. Sólo en casos de estados de excepción podrá temporalmente limitarse el ejercicio del derecho a la inviolabilidad de domicilio, inviolabilidad de correspondencia, libertad de tránsito, libertad de asociación y reunión, y libertad de información de conformidad con la Constitución, y;

f) Responsabilidad.- (Sustituido por el Art. 2 de la Ley s/n, R.O. 279-S, 29-III-2023).- El Estado tiene el deber primordial de garantizar la seguridad integral de los habitantes del Ecuador, con este fin las entidades públicas tienen la obligación de facilitar, de manera coordinada, los medios humanos, materiales y tecnológicos para el cumplimiento de los fines de la presente Ley. La responsabilidad operativa corresponde a la entidad en cuyo ámbito y competencia radique su misión, funciones y naturaleza legalmente asignadas. La coordinación y articulación entre entidades es imperativa y no implicará ni podrá ser entendida como una intromisión y alteración de las funciones de cada institución.

Título III DEL SISTEMA Y DE LOS ÓRGANOS DE SEGURIDAD PÚBLICA

Capítulo I DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DEL ESTADO

Art. 5.- Del sistema de seguridad pública y del Estado.- El sistema de seguridad pública y del Estado está conformado por la Presidencia de la República, quien lo dirige, las entidades públicas, las políticas, los planes, las normas, los recursos y los procedimientos, con sus interrelaciones, definidos para cumplir con el objeto de la presente ley; y, las organizaciones de la sociedad que coadyuven a la seguridad ciudadana y del Estado.

Los organismos e instituciones responsables del Sistema de Seguridad Pública y del Estado están sujetos al control de los organismos superiores de las funciones del Estado, legislativo, judicial y de Control y Transparencia social.

INICIO CONCORDANCIA		
Concordancia(s):		
<u>H-Art. 5-</u>		
Constitución de la República del Ecuador: Art. 163		
FIN CONCORDANCIA		



Capítulo II

DE LOS ÓRGANOS ESTATALES DE SEGURIDAD PÚBLICA, DE SUS FINES Y COMPOSICIÓN Art. 6.- Del Consejo de Seguridad Pública y del Estado.- (Sustituido por el Art. 3 de la Ley s/n, R.O. 279-S, 29-III-2023).- El Consejo de Seguridad Pública y del Estado, estará conformado por:

- 1. Presidente o Presidenta Constitucional de la República, quien lo presidirá;
- 2. Vicepresidente o Vicepresidenta Constitucional de la República;
- 3. Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional;
- 4. Presidente o Presidenta del Consejo Nacional de la Judicatura;
- 5. Presidente o Presidenta de la Corte Nacional de Justicia;
- 6. Presidente o Presidente de la Función de Transparencia y Control Social;
- 7. Ministro o Ministra responsable de la entidad encargada de la coordinación de la seguridad pública y del Estado;
- 8. Ministro o Ministra responsable de la política de defensa nacional;
- 9. Ministro o Ministra responsable de la política de seguridad ciudadana, protección interna y orden público;
- 10. Ministro o Ministra responsable de la política exterior y movilidad humana;
- 11. Ministro o ministra del ente rector del Sistema Nacional de Inteligencia;
- 12. Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas;
- 13. Comandante General de la Policía Nacional; y,
- 14. La Ministra o Ministro del organismo técnico del Sistema Nacional de Rehabilitación Social y de Atención Integral a Adolescentes Infractores.

Podrán además participar representantes de entidades públicas, gobiernos autónomos descentralizados, representantes de la sociedad o de entidades privadas, ciudadanos y ciudadanas que la Presidenta o Presidente de la República considere necesario convocar.

La Secretaría del Consejo será ejercida por el ministro o ministra responsable de la entidad encargada de la coordinación de la seguridad pública y del Estado.

El Consejo de Seguridad Pública y del Estado se reunirá cuando lo convoque el Presidente y periódicamente cada cuatro meses.

Art. 7.- De las funciones del Consejo de Seguridad Pública y del Estado.- El Consejo de Seguridad Pública y del Estado, tendrá las siguientes funciones:

- a) Asesorar y recomendar al Presidente o Presidenta de la República sobre las políticas, planes y estrategias de Estado, y sobre sus procedimientos, en materia de seguridad pública; y,
- b) Recomendar al Presidente o Presidenta de la República la adopción de medidas de



puedan afectar la integridad de los habitantes y del Estado.
INICIO CONCORDANCIA
Concordancia(s):
<u>H-Art. 7</u>
Constitución de la República del Ecuador: Art. 423
FIN CONCORDANCIA
Art. 8 De la clasificación de los actos del Consejo Las sesiones del Consejo de Seguridad Pública y del Estado, las actas y documentos anexos, podrán ser objeto de clasificación y, en consecuencia, solo si han sido clasificados, serán divulgadas luego de transcurridos los plazos previstos en esta ley.
INICIO CONCORDANCIA
Concordancia(s):
<u>H-Art. 8</u>
Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública: Art.18
FIN CONCORDANCIA
Art. 9 Entidad encargada de la coordinación de la seguridad pública y del Estado (Sustituido por el Art. 4 de la Ley s/n, R.O. 279-S, 29-III-2023) La entidad encargada de la coordinación de la seguridad pública y del estado será una entidad de derecho público, adscrita a la Presidencia de la República, con personalidad jurídica y dotada de autonomía administrativa y financiera. Será responsable de la formulación de políticas públicas integrales y para la coordinación entre los órganos que conforman el Sistema de

prevención e intervención en casos de acontecimientos graves o amenazas que afecten o

de los órganos ejecutores.

Seguridad Pública y del Estado, así como también del seguimiento y evaluación de las acciones aprobadas en materia de seguridad. Su gestión no se superpondrá a las funciones



Estará dirigida por una autoridad con rango de ministro de Estado, quien ejercerá la representación judicial y extrajudicial de la entidad. Será de libre nombramiento y remoción del presidente o presidenta de la República.

- Art. 10.- Funciones de la entidad encargada de la coordinación de la seguridad pública y del Estado.- (Sustituido por el Art. 5 de la Ley s/n, R.O. 279-S, 29-III-2023).- La entidad encargada de la coordinación de la seguridad pública y del Estado cumplirá las siguientes funciones:
- a) Formular el Plan Nacional de Seguridad Integral y propuestas de políticas de seguridad pública y del Estado con el aporte de los órganos del Sistema, otras entidades del Estado y de la ciudadanía para ponerlas en consideración del Presidente de la República y del Consejo de Seguridad Pública y del Estado.
- El Plan Nacional de Seguridad Integral será elaborado en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo y será presentado ante el Presidente de la República y el Consejo de Seguridad Pública y del Estado, en el plazo máximo de 90 días posteriores a la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo. En caso de renovación de la o el titular de la entidad, se podrá presentar en el mismo plazo, una propuesta de actualización;
- b) Elaborar políticas y directrices para la coordinación entre los órganos del Sistema de Seguridad Pública y del Estado, sin trasgredir sus funciones y misiones institucionales;
- c) Elaborar políticas integrales de seguridad pública y del Estado;
- d) Actuar como Secretario del Consejo de Seguridad Pública y del Estado, responsabilizarse de la información clasificada, los libros de actas, documentación y contenido digital y establecer procesos para la gestión documental y de archivo;
- e) Coordinar acciones con los órganos ejecutores de la seguridad pública y del Estado;
- f) Asesorar técnicamente al Presidente de la República para el cumplimiento del objeto de la presente Ley;
- g) Realizar seguimiento y evaluación de las políticas, planes, proyectos y acciones de seguridad pública dispuestos por el Presidente de la República o el Consejo de Seguridad Pública y del Estado;
- h) Realizar investigación, estudios y análisis permanentes en materia de seguridad pública y del Estado;
- i) Coordinar con la Secretaría Nacional de Inteligencia, con el propósito de disponer de oportuna, completa y fluida información estratégica, para asesorar al presidente o



presidenta de la República en políticas, planes, programas y acciones en seguridad pública y del Estado y para la coordinación con los órganos ejecutores;

- j) Sugerir a la Presidenta o Presidente de la República convocar al Consejo de Seguridad Pública y del Estado cuando la situación lo amerite;
- k) Coordinar la elaboración del Plan y la ejecución de la movilización nacional, cuando circunstancias de crisis o conmoción nacional, lo exijan;
- I) Elaborar estudios e informes de sustento para las recomendaciones que debe hacer el Consejo de Seguridad Pública y del Estado al Presidente o Presidenta de la República sobre los aspectos relativos a sectores estratégicos y zonas de seguridad, previo informe del Comando Conjunto;
- m) Mantener informado al Presidente o Presidenta de la República sobre su gestión;
- n) Articular con la entidad responsable de la coordinación y supervisión de la gestión de las gobernaciones provinciales, las gobernaciones provinciales, los órganos ejecutores del Sistema de Seguridad Pública y del Estado, los gobiernos autónomos descentralizados y la sociedad civil, acciones para la seguridad integral a nivel territorial, en los términos establecidos en la presente Ley;
- o) Promover en cada provincia la conformación de consejos de seguridad provinciales y expedir directrices para su funcionamiento; y,
- p) Las demás que disponga el Presidente o la Presidenta de la República y esta Ley.

Capítulo innumerado CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL (Agregado por el Art. 6 de la Ley s/n, R.O. 279-S, 29-III-2023)

Art. 10.1.- Consejo Nacional de Política Criminal.- (Agregado por el Art. 7 de la Ley s/n, R.O. 279-S, 29-III-2023).- El Consejo Nacional de Política Criminal es el organismo interinstitucional encargado de aprobar la política criminal, articulada al Plan Nacional de Seguridad Integral del Estado.

La política criminal es el conjunto de respuestas que el Estado adopta, de manera integral e intersectorial, para prevenir y enfrentar la delincuencia y criminalidad con el fin de garantizar la protección de los intereses esenciales del Estado y los derechos de sus habitantes.

Art. 10.2.- Conformación del Consejo Nacional de Política Criminal.- (Agregado por el Art. 8 de la Ley s/n, R.O. 279-S, 29-III-2023).- El Consejo Nacional de Política Criminal, estará integrado por:



- 1. Un delegado o delegada del Presidente de la República;
- 2. El Ministro del ente rector de la política de derechos humanos;
- 3. El Ministro o Ministra de la entidad encargada de la coordinación de la seguridad pública y del Estado;
- 4. El Ministro o Ministra del ente rector de seguridad ciudadana, protección interna y orden público;
- 5. El Ministro o Ministra del ente rector de la Defensa Nacional;
- 6. El Ministro o Ministra de responsable de la coordinación y supervisión de la gestión de las gobernaciones provinciales;
- 7. El Ministro o Ministra del ente rector del Sistema Nacional de Inteligencia;
- 8. La Ministra o Ministro del organismo técnico del Sistema Nacional de Rehabilitación Social y de Atención Integral a Adolescentes Infractores;
- 9. El Ministro o la Ministra responsable de la coordinación del sector social o que sea designada por el Presidente o Presidenta de la República con este fin;
- 10. El Presidente o Presidenta del Consejo de la Judicatura o en ausencia, la delegada o delegado del Pleno del organismo;
- 11. El Presidente o Presidenta de la Corte Nacional de Justicia o en ausencia, la delegada o delegado del Pleno del organismo;
- 12. El o la Fiscal General del Estado o su delegada o delegado;
- 13. El o la Comandante General de la Policía Nacional;
- 14. La autoridad del Servicio Nacional de Aduanas o su delegada o delegado; y,
- 15. La autoridad de la Unidad de Análisis Financiero y Económico.

El o la delegada del Presidente de la República presidirá el Consejo; y, el ente rector de la política criminal y de derechos humanos ejercerá como Secretaría Técnica de éste.

Las autoridades podrán delegar a servidoras o servidores de la institución a la que representan, en cuyo caso las o los delegados tendrán por lo menos el rango de subsecretario, cuando corresponda. Las o los delegados serán permanentes, salvo remoción motivada.

Participará, además, con voz y sin voto el asesor o asesora delegada de la Comisión Especializada Permanente encargada de la temática de seguridad de la Asamblea Nacional, quien elaborará informes periódicos trimestrales a la Comisión. La Comisión podrá remover al delegado o delegada.

Art. 10.3.- Funcionamiento del Consejo Nacional de Política Criminal.- (Agregado por el Art. 9 de la Ley s/n, R.O. 279-S, 29-III-2023).- El Consejo Nacional de Política Criminal, establecerá las normas de funcionamiento de conformidad con el reglamento que expida para el efecto y que contendrá aspectos relativos a la periodicidad de las convocatorias, votaciones, designación de comisiones o mesas técnicas, lugar de reuniones, mecanismos de acreditación de las y los delegados institucionales, régimen de ausencias y justificaciones, posibilidad de pedido de sustitución de la delegada o delegado y demás aspectos que faciliten su organización y funcionamiento.



El Pleno del Consejo Nacional de Política Criminal, se reunirá, al menos, una vez cada trimestre.

El Consejo podrá crear mesas de trabajo, grupos o subcomisiones integradas por uno o varios de sus miembros para que desarrollen los temas que les sean asignados y que luego se integren al Plan de Política Criminal o faciliten su seguimiento y ejecución. También podrá invitar a sus sesiones a otras autoridades, representantes de gobiernos autónomos descentralizados, expertos, académicos, representantes de organismos internacionales o miembros de la sociedad civil y suscribir convenios con ellos para la generación de información, diseño o ejecución de planes o programas específicos.

Art. 10.4.- Ente rector de la política criminal y derechos humanos.- (Agregado por el Art. 10 de la Ley s/n, R.O. 279-S, 29-III-2023).- La rectoría de la política criminal será ejercida por un ministerio, con personalidad jurídica, dotado de autonomía técnica, administrativa, operativa y financiera, que tendrá las siguientes atribuciones y competencias:

- 1. Ejercer la rectoría de la política criminal y derechos humanos;
- 2. Actuar como Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Política Criminal;
- 3. Diseñar, definir e implementar planes, programas y proyectos en el ámbito de la política criminal y los derechos humanos;
- 4. Preparar una propuesta de Plan de Política Criminal que será puesta en conocimiento del Consejo Nacional de Política Criminal, para su aprobación;
- 5. Formular y ejecutar políticas para la erradicación de todas formas de violencia y discriminación, en particular, contra mujeres, niñas niños, adolescentes y otros grupos de atención prioritaria;
- 6. Coordinar y ejecutar, en su ámbito de competencia, la implementación del Plan de Política Criminal;
- 7. Articular acciones con las demás entidades de la Función Ejecutiva y con la Función Judicial para asegurar el cumplimiento de la política criminal del país;
- 8. Articular la política criminal a la política de seguridad integral del país, en coordinación con las entidades competentes;
- 9. Transversalizar la política pública de derechos humanos en la administración pública;
- 10. Garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones nacionales e internacionales en materia de derechos humanos;
- 11. Vigilar el cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos en el Sistema de Rehabilitación Social, en coordinación con el organismo técnico del Sistema;
- 12. Protección a pueblos indígenas en aislamiento voluntario; y,
- 13. Otras establecidas en la ley.

La máxima autoridad del ente rector de política criminal y derechos humanos no podrá asumir la rectoría de materias distintas a las señaladas en esta Ley.

Art. 10.5.- Plan de Política Criminal.- (Agregado por el Art. 11 de la Ley s/n, R.O. 279-S, 29-III-2023).- El Plan de Política Criminal incluirá un diagnóstico del fenómeno de la



criminalidad en el país y las respuestas planificadas y coordinadas a corto, mediano y largo plazo que el Estado debe adoptar para prevenirlo y combatirlo. Definirá políticas, acciones y recomendaciones dirigidas a la prevención de las causas del delito, respuestas penales para sancionarlo y mecanismos de rehabilitación y reinserción de las personas infractoras en la sociedad.

El Plan de Política Criminal contendrá objetivos, metas e indicadores medibles de cumplimiento, así como, la estrategia de intervención de las entidades públicas involucradas en su ejecución.

El Ente rector de la planificación estatal establecerá criterios y metodología que garanticen la evaluación integral periódica, anual y quinquenal de la Política Criminal.

Capítulo III DE LOS ÓRGANOS EJECUTORES

Art. 11.- De los órganos y organismos de seguridad ejecutores.- (Reformado por el Art. 3 de la Ley s/n, R.O. 279-S, 29-III-2023).- Los órganos ejecutores del Sistema de Seguridad Pública y del Estado estarán a cargo de las acciones de defensa; seguridad ciudadana, protección interna y orden público; prevención; gestión integral de riesgos; y, gestión penitenciaria, conforme lo siguiente:

a) Ente rector de la defensa nacional, ente rector de la política exterior y Fuerzas Armadas.- (Sustituido por el Art. 13 de la Ley s/n, R.O. 279-S, 29-III-2023).- La defensa de la soberanía del Estado y la integridad territorial tendrá como entes rectores al ministerio rector de la defensa nacional y al ministerio rector de la política exterior en los ámbitos de su responsabilidad y competencia. Corresponde a las Fuerzas Armadas su ejecución para cumplir con su misión fundamental de defensa de la soberanía e integridad territorial.

El ministerio rector de la política exterior, previo acuerdo con el ministerio rector de la política de defensa nacional coordinará la cooperación, intercambio de información y operaciones militares combinadas con otros países, conforme a los instrumentos internacionales y la ley de la materia, en el marco del respeto a la soberanía nacional, a los derechos de las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos definidos en la Constitución y en la ley.

La defensa de la soberanía e integridad territorial incluirá acciones para recuperar o mantener la soberanía en aquellas zonas en las que por condiciones extraordinarias de seguridad el Estado ha disminuido la capacidad de ejercer sus atribuciones, lo cual incluye acciones para prevenir y erradicar la actividad de organizaciones criminales trasnacionales en el territorio nacional debidamente coordinadas con las instituciones competentes y de conformidad con la Constitución y la ley.

b) Seguridad ciudadana y orden público: Ministerio rector de la seguridad ciudadana,



protección interna y orden público y Policía Nacional.- (Sustituido por el Art. 14 de la Ley s/n, R.O. 279-S, 29-III-2023).- La seguridad ciudadana, protección interna, el mantenimiento y control del orden público tendrán como ente rector al ministerio rector de la seguridad ciudadana, protección interna y orden público, que será el responsable de la dirección, planificación, regulación, gestión y control de la Policía Nacional.

Corresponde a la Policía Nacional la ejecución de las políticas la que contribuirá con los esfuerzos públicos, comunitarios y privados para lograr la seguridad ciudadana, la protección de los derechos, libertades y garantías de la ciudadanía. Apoyará y ejecutará todas las acciones en el ámbito de su responsabilidad constitucional, para proteger a los habitantes en situaciones de violencia, delincuencia común y crimen organizado. Coordinará su actuación con los órganos correspondientes de la Función Judicial y las entidades del Sistema de Seguridad Pública y del Estado.

La Policía Nacional desarrollará sus tareas de forma desconcentrada a nivel local y regional, en estrecho apoyo y colaboración con los gobiernos autónomos descentralizados.

En la ejecución de tareas para prevenir o combatir al crimen organizado, así como para defender a los habitantes de las situaciones de violencia, la Policía Nacional como ente ejecutor podrá contar con el apoyo complementario, extraordinario, regulado y fiscalizado de las Fuerzas Armadas en el marco de sus atribuciones y misión constitucional, previa justificación basada en parámetros técnicos que visibilicen que las capacidades de la Policía Nacional han sido empleadas y la amenaza no ha sido controlada, y una vez declarado el estado de excepción. Esta colaboración será siempre en operaciones específicas y subordinadas al Presidente de la República, sin perjuicio del ejercicio de las competencias ordinarias de las Fuerzas Armadas.

El ministerio rector de la seguridad ciudadana, protección interna y orden público y Policía Nacional a fin de asegurar la coordinación de acciones a nivel territorial y con los gobiernos autónomos descentralizados, articulará acciones con la entidad responsable de la coordinación y supervisión de la gestión de las gobernaciones provinciales y la entidad encargada de la coordinación de la seguridad pública y del Estado.

El ente rector de Relaciones Exteriores, previo acuerdo con el rector de la seguridad ciudadana, protección interna y orden público, coordinará la cooperación, intercambio de información y operaciones policiales acordadas con otros países, conforme a los instrumentos internacionales y la ley de la materia, en el marco del respeto a la soberanía nacional y a los derechos de los personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos definidos en la Constitución y la ley;

c) (Reformado por la Disposición Reformatoria Sexta del Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, R.O. 19-S, 21-VI-2017; Sustituido por el Art. 15



de la Ley s/n, R.O. 279-S, 29-III-2023).- Prevención: Entidades responsables.- En los términos de esta Ley, la prevención y la protección de la convivencia y seguridad ciudadanas, corresponden a todas las entidades del Estado y a los gobiernos autónomos descentralizados.

En el ámbito de prevención para proteger la convivencia y seguridad, todas las entidades coordinarán con el ministerio rector de la seguridad ciudadana, protección interna y orden público.

El Plan Nacional de Seguridad Integral fijará las prioridades y designará las entidades públicas encargadas de su aplicación, de acuerdo con el tipo y naturaleza de los riesgos, amenazas o medidas de protección o prevención priorizadas. Cada ministerio de estado y gobierno autónomo descentralizado estructurará y desarrollará un plan de acción en concordancia con el Plan Nacional de Seguridad Integral, de conformidad con su ámbito de gestión y competencias constitucionales y legales.

La prevención del delito y la criminalidad permitirá articular normas, políticas, planes, programas, proyectos, mecanismos, actividades y acciones orientadas a prevenir las conductas delictivas de adultos y adolescentes, a través de la atención preventiva a la población ecuatoriana o extranjera que vive en el país.

La prevención del delito y la criminalidad, entre otros, incluirá los ámbitos: social, comunitario, situacional, psicosocial, rehabilitación y desarrollo integral; y, reinserción y apoyo a personas liberadas.

La Fiscalía General del Estado y todas las demás entidades estatales están obligadas a proporcionar información íntegra, exacta que permita la actualización del registro único del delito que será creado, administrado e implementado por el ministerio rector de la seguridad ciudadana, protección interna y orden público, de conformidad con el Reglamento General a esta Ley y los protocolos que se expidan para el efecto.

Las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, siendo instituciones de protección de derechos y libertades, ejecutarán acciones de coordinación y apoyo para garantizar la seguridad integral, sin exceder sus respectivas misiones y funciones constitucionales y legales.

La sociedad civil y la familia en todos sus tipos podrán proponer, promover y desarrollar actividades para disminuir las conductas delictivas y prevenir el delito, así como también ser parte activa de los planes, programas, proyectos, mecanismos, actividades y acciones generadas desde el Estado para el mismo fin.

Se garantiza y reconoce a la sociedad civil y a la academia la facultad de crear observatorios para la seguridad ciudadana.



d) Gestión integral de riesgos de desastres.- (Sustituido por el Art. 16 de la Ley s/n, R.O. 279-S, 29-III-2023).- Entidad rectora de la política de gestión integral del riesgo de desastres.- La rectoría de la gestión integral del riesgo de desastres la ejercerá el Estado central a través de la entidad rectora de la política de gestión integral de riesgos que establecerá instrumentos para la planificación e implementación de medidas integradas, inclusivas y transversales que prevengan y reduzcan el grado de exposición y de vulnerabilidad de la población, colectividades y la naturaleza, aumenten la preparación para la respuesta y fortalezcan los procesos de recuperación y reconstrucción para incrementar la resiliencia de la población y sus territorios.

La prevención y las medidas para reducir los riesgos de desastres de origen natural y antrópico corresponden a las entidades públicas y privadas, nacionales, regionales y locales conforme al principio de descentralización subsidiaria.

e) Gestión penitenciaria.- (Sustituido por el Art. 17 de la Ley s/n, R.O. 279-S, 29-III-2023).- La rectoría de la gestión y administración penitenciaria la ejercerá el organismo técnico del Sistema Nacional de Rehabilitación Social y de Atención Integral a Adolescentes Infractores, que tendrá como ámbitos diferenciados de política y gestión, la atención a personas adultas privadas de libertad y el desarrollo integral de las y los adolescentes infractores.

Contará con el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitencia que, conforme a la normativa vigente, garantizará la seguridad de los centros de privación de libertad y de las personas privadas de libertad; y, con inspectores educadores para la atención a adolescentes infractores.

La política de administración penitenciaria se formulará y ejecutará en respeto a la dignidad de las personas privadas de libertad y los estándares internacionales de derechos humanos en consonancia con las mejores prácticas de seguridad penitenciaria.

Art. ... Complementariedad de acciones de Fuerzas Armadas a la Policía Nacional.- (Agregado por el Art. Único de la Ley s/n, R.O. 263-2S, 9-VI-2014).- Con el fin de precautelar la protección interna, el mantenimiento y control del orden público y la seguridad ciudadana, las Fuerzas Armadas podrán apoyar de forma complementaria las operaciones que en esta materia competen a la Policía Nacional. Para tal efecto, los/las Ministros/as responsables de la Defensa Nacional y del Interior, coordinarán la oportunidad y nivel de la intervención de las fuerzas bajo su mando, estableciendo las directivas y protocolos necesarios.

El Ministerio de Finanzas asignará los recursos necesarios para el entrenamiento, equipamiento y empleo de las Fuerzas Armadas para proteger la seguridad ciudadana, en base a los planes que diseñará el Comando Conjunto de la Fuerzas Armadas.

El Ministerio de Defensa Nacional informará a la Asamblea Nacional sobre la ejecución de



los planes de empleo militar en las operaciones de complementariedad que realice en apoyo a la Policía Nacional.

En casos de grave conmoción interna, la aplicación de los planes para el uso de las fuerzas militares, será expedida mediante Decreto Ejecutivo que declare el Estado de Excepción, de conformidad con la Constitución y la ley.

Nota:

La Sentencia No. 33-20-IN/21 (R.O. E.C. 185, 8-VI-2021), declaró la inconstitucionalidad por el fondo del presente artículo.

Capítulo IV

DE LOS ÓRGANOS PERMANENTES DE COORDINACIÓN, APOYO TÉCNICO Y ASESORÍA

- Art. 12.- De la Dirección Nacional de Movilización.- La Dirección Nacional de Movilización es una unidad administrativa del Ministerio de Coordinación de Seguridad o quien haga sus veces, encargada de la elaboración y ejecución de planes de movilización nacional. El Director de Movilización será nombrado por el Ministerio de Coordinación de la Seguridad o quien haga sus veces.
- Art. 13.- Entidad rectora del Sistema Nacional de Inteligencia.- (Sustituido por el Art. 18 de la Ley s/n, R.O. 279-S, 29-III-2023).- La entidad rectora y responsable del Sistema Nacional de Inteligencia será una entidad de derecho público, con independencia administrativa y financiera, con personalidad jurídica. El ministro de la entidad rectora será nombrado por el presidente o la presidenta de la República y no podrá ser miembro activo de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional.
- Art. 14.- De la inteligencia y contrainteligencia.- Para efectos de esta ley se entenderá por:
- a) Inteligencia, la actividad consistente en la obtención, sistematización y análisis de la información específica referida a las amenazas, riesgos y conflictos que afecten a la seguridad integral. La información de inteligencia es sustancial para la toma de decisiones en materia de seguridad; y,
- b) Contrainteligencia, la actividad de inteligencia que se realiza con el propósito de evitar o contrarrestar la efectividad de las operaciones de inteligencia que representan amenazas o riesgos para la seguridad.
- Art. 15.- De las funciones de la Secretaría Nacional de Inteligencia.- La Secretaría Nacional de Inteligencia será responsable de:
- a) Elaborar el Plan Nacional de Inteligencia, bajo los lineamientos y objetivos de estado y de gobierno establecidos por el Presidente de la República, plan que entre otros aspectos deberá contener las metas periódicas de sus acciones y los procedimientos de coordinación entre las diversas entidades que conforman el Sistema Nacional de Inteligencia. Plan que deberá ser aprobado por el Presidente de la República;



- b) Coordinar y ejecutar las actividades de obtención y análisis de la información para la producción de conocimientos e inteligencia pertinentes, a fin de garantizar la seguridad pública y del Estado y el buen vivir;
- c) (Sustituido por el Art. 19 de la Ley s/n, R.O. 279-S, 29-III-2023).- Coordinar, articular e integrar las actividades y el funcionamiento de los organismos militares, policiales y penitenciarios del Sistema Nacional de Inteligencia, de los destinados a la seguridad de la Presidencia de la República y otros similares que se creen en el futuro, en sus ámbitos y niveles, así como las relaciones con organismos de inteligencia de otros Estados.
- d) (Sustituido por el Art. 19 de la Ley s/n, R.O. 279-S, 29-III-2023).- Proporcionar, en forma oportuna, simultánea y fluida, inteligencia estratégica al Presidente de la República y a la entidad encargada de la coordinación de la seguridad pública y del Estado, a fin de que este último coordine acciones de los órganos ejecutores pertinentes, sin suplir sus competencias operativas específicas. En aquellos casos en los que la inteligencia estratégica se refiera a acontecimientos o amenazas especialmente graves, la entidad encargada de la coordinación de la seguridad pública y del Estado preparará las propuestas y escenarios para que el Consejo de Seguridad Pública y del Estado proporcione la asesoría y recomendaciones al Presidente o Presidenta de la República.
- e) Contribuir al mantenimiento de la integridad e independencia del Estado, el estado de derechos y justicia; sus instituciones y la prevención del crimen organizado. No podrá contar entre sus miembros con personal extranjero; y,
- f) Otras que se establezcan en esta Ley y en la normativa que se expedirá para el efecto. Art. 16.- De la organización y funcionamiento de la Secretaría Nacional de Inteligencia.- Las responsabilidades, funciones específicas, prohibiciones, procedimientos, jerarquías, líneas de mando, clasificación y niveles de accesibilidad de la información, el establecimiento de sistemas de pesos y contrapesos interinstitucionales o de procedimientos para preservar el secreto, la reserva, la clasificación, reclasificación y desclasificación de información, y, el correcto uso y destino de la información de la Secretaría Nacional de Inteligencia se establecerán en el reglamento a esta Ley.
- Art. 17.- Del requerimiento de información.- En función de la seguridad del Estado, los ministerios y otras entidades públicas entregarán a la Secretaría Nacional de Inteligencia la información que les sea requerida; inclusive la información clasificada la que deberá emitirse con la clasificación otorgada, la que será objeto de desclasificación en los plazos o condiciones previstas en la Ley.

Previo a solicitar información a los ministerios y entidades públicas, la Secretaría Nacional de Inteligencia deberá poner en conocimiento de esta decisión al Presidente o Presidenta de la República. Las entidades públicas mencionadas no proporcionarán esta información si en la petición no se demuestra el cumplimiento de este requisito.



Art. 18.- De los gastos especiales.- La Secretaría Nacional de Inteligencia dispondrá de un fondo permanente de gastos especiales asignados a actividades de inteligencia y contrainteligencia para la protección interna, el mantenimiento del orden público y de la defensa nacional, cuyo uso no se someterá a las normas previstas en la ley que regula el sistema nacional de contratación pública.

El fondo permanente de gastos reservados constará en el Presupuesto General del Estado, monto que será de acceso público, no las asignaciones de los gastos que será información clasificada.

Art. 19.- De la clasificación de la información de los organismos de seguridad.- La Secretaría Nacional de Inteligencia y los organismos de seguridad podrán clasificar la información resultante de las investigaciones o actividades que realicen, mediante resolución motivada de la máxima autoridad de la entidad respectiva.

La información y documentación se clasificará como reservada, secreta y secretísima. El reglamento a la ley determinará los fundamentos para la clasificación, reclasificación y desclasificación y los niveles de acceso exclusivos a la información clasificada.

Toda información clasificada como reservada y secreta será de libre acceso luego de transcurridos cinco y diez años, respectivamente; y si es secretísima luego de transcurridos quince años.

La información clasificada como secretísima será desclasificada o reclasificada por el Ministerio de Coordinación de Seguridad o quien haga sus veces. De no existir reclasificación, se desclasificará automáticamente una vez cumplido el plazo previsto de quince (15) años.

En ejercicio de los derechos y garantías individuales los ciudadanos podrán demandar ante la Corte Constitucional la desclasificación de la información en el evento de que existan graves presunciones de violaciones a los derechos humanos o cometimiento de actos ilegales.

Art. 20.- De la autorización judicial.- Cuando los organismos de inteligencia, como parte de las operaciones encubiertas, requieran retener, abrir, interceptar o examinar documentos o comunicaciones por cualquier medio, solicitarán de forma motivada al Presidente o Presidenta de la Corte Nacional de Justicia la autorización correspondiente, mediante solicitud reservada, la cual constará en los registros especiales que, para el efecto, mantendrá la Función Judicial.

En la normativa que emitirá el Consejo Nacional de la Judicatura se establecerá el procedimiento para determinar el Juez competente en caso de impedimiento del Presidente de la Corte Nacional de Justicia o de la Sala Especializada de lo Penal para el caso de apelación.



Estos registros especiales se desclasificarán en el plazo de quince (15) años previsto en la presente ley.

La solicitud será resuelta de forma motivada por el juez en el plazo máximo de veinte y cuatro (24) horas. Todas las actuaciones judiciales relativas a dicha solicitud mantendrán la reserva. El juez podrá negar la solicitud por impertinencia o por afectación grave a los derechos de los sujetos sobre quienes se ejerce la operación encubierta, o por considerar que tiene como único objetivo el beneficio político del requirente. De la negativa se podrá apelar ante la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, hasta dentro del plazo de tres (3) días, la que podrá resolver modificando la resolución venida en grado.

De otorgar el Juez la autorización, ésta será concedida hasta por un plazo máximo de sesenta (60) días, que caducará automáticamente; salvo que haya solicitud debidamente justificada para su renovación por una sola vez; y que fuera otorgada nuevamente por el Juez interviniente; en este caso, se podrá extender el plazo hasta por sesenta días (60) siempre que fuera imprescindible para completar la investigación.

La autorización que otorgue el Juez mediante oficio, dará las instrucciones para orientar el cumplimiento de las garantías constitucionales.

Art. 21.- De la destrucción de información que no da lugar a la acción penal.- Si la información recolectada en las operaciones encubiertas no diera lugar al inicio de la acción penal correspondiente, todos los soportes de las grabaciones e información documental obtenida, deberán ser destruidos o borrados, previa autorización y en presencia del Juez interviniente.

En este caso, de forma previa a la destrucción se deberá notificar a la persona que fue objeto de la investigación, quien de forma previa a la destrucción tiene derecho a conocer las piezas procesales, conforme el plazo y procedimiento que se establecerán en el reglamento a la presente ley.

Art. 22.- De la prohibición.- Ningún organismo de inteligencia está facultado para obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su etnia, orientación sexual, credo religioso, acciones privadas, posición política o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción.

Título IV DE LA SEGURIDAD CIUDADANA

Art. 23.- De la seguridad ciudadana.- La seguridad ciudadana es una política de Estado, destinada a fortalecer y modernizar los mecanismos necesarios para garantizar los derechos humanos, en especial el derecho a una vida libre de violencia y criminalidad, la disminución de los niveles de delincuencia, la protección de víctimas y el mejoramiento de la calidad de vida de todos los habitantes del Ecuador.



Con el fin de lograr la solidaridad y la reconstitución del tejido social, se orientará a la creación de adecuadas condiciones de prevención y control de la delincuencia; del crimen organizado; del secuestro, de la trata de personas; del contrabando; del coyoterismo; del narcotráfico, tráfico de armas, tráfico de órganos y de cualquier otro tipo de delito; de la violencia social; y, de la violación a los derechos humanos.

Se privilegiarán medidas preventivas y de servicio a la ciudadanía, registro y acceso a información, la ejecución de programas ciudadanos de prevención del delito y de erradicación de violencia de cualquier tipo, mejora de la relación entre la policía y la comunidad, la provisión y medición de la calidad en cada uno de los servicios, mecanismos de vigilancia, auxilio y respuesta, equipamiento tecnológico que permita a las instituciones vigilar, controlar, auxiliar e investigar los eventos que se producen y que amenazan a la ciudadanía.

Título V DEL CONTROL A LOS ÓRGANOS DE LA SEGURIDAD

Art. 24.- Del control democrático.- (Sustituido por el Art. 20 de la Ley s/n, R.O. 279-S, 29-III-2023).- La entidad rectora del Sistema Nacional de Inteligencia y las máximas autoridades de los órganos ejecutores rendirán cuentas de su gestión, para su debido control al Ejecutivo y cada seis meses a la Asamblea Nacional, a través de Comisión Especializada Permanente encargada de la temática de seguridad, la que se declarará en sesión reservada, para el cumplimiento de esta obligación. La rendición de cuentas se realizará en base a objetivos, metas e indicadores. Las entidades no podrán invocar la clasificación para negar el acceso a la información a la Comisión, sin embargo, la Comisión, estará obligada a mantener el mismo nivel de reserva de acuerdo con la clasificación de la información. El Consejo de Administración Legislativa, expedirá el reglamento de sesiones reservadas y los protocolos de manejo de información clasificada.

La Comisión Especializada de la Asamblea informará semestralmente al Pleno de la Asamblea respecto del cumplimiento en la rendición de cuentas.

La entidad rectora del Sistema Nacional de Inteligencia y las máximas autoridades de los órganos ejecutores rendirán cuentas también a la Contraloría General del Estado en el ámbito de su competencia.

La entidad rectora del Sistema Nacional de Inteligencia contará con las autorizaciones previas de la Función Judicial conforme dispone esta Ley.

Art. 25.- Del mecanismo de control interno.- Cada organismo del Sistema Nacional de Inteligencia establecerá un mecanismo de control interno concurrente que, en lo principal garantice:

a) Velar por el correcto desempeño de funciones y responsabilidades atribuidas a cada



uno de los servidores que prestan servicios dentro del Sistema Nacional de Inteligencia;

- b) Detectar las fugas de información;
- c) Precautelar que los procedimientos empleados en materia de inteligencia no menoscaben las garantías y derechos constitucionales; y,
- d) Detectar los casos en que los servidores del Sistema Nacional de Inteligencia incurran en extralimitación de atribuciones o funciones.

Todo lo cual será evaluado por la Secretaría Nacional de Inteligencia.

Art. 26.- Del control a los gastos especiales.- La rendición de cuentas sobre el uso de los gastos especiales que efectúe la Secretaría Nacional de Inteligencia se realizará ante el Contralor General del Estado, conforme el procedimiento que este funcionario emitirá para el efecto, en el que necesariamente se establecerá que los gastos efectuados deberán tener respaldo instrumental.

De dichos documentos únicamente se conservarán los que permitan conocer el destino de los gastos especiales, mas no sus beneficiarios, a fin de que puedan desclasificarse dentro del plazo de quince (15) años previsto en esta ley. Los demás serán incinerados por el Contralor.

Art. 27.- Interrupción de la prescripción y caducidad.- De existir indicios de responsabilidad civil, administrativa y penal, sin exclusión alguna, que se conozcan una vez levantada la clasificación de la información, se presumirá que ha operado la interrupción de la prescripción y de la caducidad por todo el tiempo de clasificación de la información, por lo que la prescripción y la caducidad iniciarán a partir de la fecha en que la información se hizo de acceso público.

TÍTULO INNUMERADO

ESTADO DE EMERGENCIA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DEL ESTADO (Agregado por la Disp. Reformatoria Vigésima Séptima de la Ley s/n, R.O. 131-3S, 22-VIII-2022)

Art. (...).- Declaratoria de estado de emergencia.- El Presidente de la República, mediante decreto, podrá declarar en estado de emergencia al Sistema de Seguridad Pública y del Estado.

El estado de emergencia obliga a las entidades que integran el Sistema de Seguridad Pública y del Estado a determinar y ejecutar acciones estratégicas especiales de coordinación y cooperación interinstitucional y operativa para enfrentar la situación de amenaza, en respeto de sus competencias constitucionales y legales.

Durante la vigencia de la declaratoria de emergencia, se podrá:



- 1. Definir y ejecutar planes, operaciones y operativos conjuntos entre las entidades que integran el Sistema de Seguridad Pública y del Estado;
- 2. Establecer acciones articuladas o conjuntas con otras entidades del gobierno central y desconcentrado u otras funciones del Estado;
- 3. Delimitar acciones estratégicas y tácticas en un territorio determinado con la cooperación de los gobiernos autónomos descentralizados competentes;
- 4. Determinar prioridades de políticas pública en los sectores que se requieran para enfrentar la emergencia; y,
- 5. Otras orientadas a enfrentar la situación que generó la declaratoria de emergencia y que no se encuentren prohibidas en esta Ley y en el ordenamiento jurídico.
- Art. (...).- Prohibiciones durante la vigencia del estado de emergencia.- Durante la vigencia del estado de emergencia no se podrá:
- 1. Limitar ni restringir derechos constitucionales.
- 2. Decretar la recaudación anticipada de tributos.
- 3. Utilizar los fondos públicos destinados a otros fines.
- 4. Trasladar la sede del gobierno a cualquier lugar del territorio nacional.
- 5. Disponer censura previa en la información de los medios de comunicación social con estricta relación a los motivos del estado de excepción y a la seguridad del Estado.
- 6. Establecer como zona de seguridad todo o parte del territorio nacional.
- 7. Disponer el empleo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional y llamar a servicio activo a toda la reserva o a una parte de ella, así como al personal de otras instituciones.
- 8. Disponer el cierre o la habilitación de puertos, aeropuertos y pasos fronterizos.
- 9. Disponer la movilización y las requisiciones que sean necesarias, y decretar la desmovilización nacional, cuando se restablezca la normalidad.
- Art. (...).- Casos para la declaratoria de estado de emergencia.- El Presidente de la República podrá declarar al Sistema de Seguridad Pública y del Estado en estado de emergencia en los siguientes casos:
- 1. Cuando el ente rector del Sistema Nacional de Inteligencia lo sugiera, previa fundamentación en apreciaciones de inteligencia o contrainteligencia que lo justifiquen. Esta sugerencia se realizará directamente al Presidente de la República, únicamente cuando existan elementos serios que permitan prever amenazas de ataques contra sectores estratégicos o contra parte de la población;
- 2. En casos de desastres naturales o antrópicos que amenacen con poner en serio peligro la segundad de los habitantes; o,
- 3. Ante la amenaza inminente o posibilidad real de un conflicto armado.
- Art. (...).- Duración del estado de emergencia.- La declaratoria de emergencia del Sistema de Seguridad Pública y del Estado podrá durar hasta noventa (90) días, y podrá ser renovado hasta dos (2) veces por igual período tiempo. Durante este período las entidades del Sistema se encontrarán en estado de alerta permanente.
- Art. (...).- Cooperación y colaboración de los agentes.- Durante el estado de emergencia todos los agentes ejecutores de la seguridad pública deberán cooperar y colaborar en el



marco de sus funciones, sin que eso implique que se desnaturalice su función misional. Los entes rectores de la Defensa nacional y del orden público, protección interna y seguridad ciudadana asegurarán que las entidades de seguridad tengan protocolos y doctrina que guíe su accionar conjunto durante estas operaciones. El comando de las operaciones estará en la fuerza cuya misión corresponda a la naturaleza de la emergencia.

Título VI DE LOS ESTADOS DE EXCEPCIÓN

Capítulo I DE LA DEFINICIÓN Y DECLARATORIA DE LOS ESTADOS DE EXCEPCIÓN

Art. 28.- De la definición.- Los estados de excepción son la respuesta a graves amenazas de origen natural o antrópico que afectan a la seguridad pública y del Estado. El estado de excepción es un régimen de legalidad y por lo tanto no se podrán cometer arbitrariedades a pretexto de su declaración.

Art. 29.- De la declaratoria.- La facultad de declarar el estado de excepción corresponde al Presidente o Presidenta de la República y es indelegable.

El Decreto Ejecutivo motivado declarando el estado de excepción cumplirá con los principios de necesidad, proporcionalidad, legalidad, temporalidad, territorialidad y razonabilidad establecidos en la Constitución. El Decreto será dictado en caso de estricta necesidad, es decir, si el orden institucional no es capaz de responder a las amenazas de seguridad de las personas y del Estado.

El Decreto expresará la causa, motivación, ámbito territorial, duración y medidas. Deberá contener en forma clara y precisa las funciones y actividades que realizarán las instituciones públicas y privadas involucradas.

La declaración del estado de excepción no interrumpirá el normal funcionamiento de los funciones del Estado.

INICIO CONCORDANCIA		
Concordancia(s):		
H-Art. 29		
Constitución de la República del Ecuador: Art. 164-		
FIN CONCORDANCIA		

INICIO CONICODO ANICIA



Art. 30.- De los requisitos para decretar el estado de excepción.- El proceso formal para decretar el estado de excepción será el contemplado en la Constitución de la República, la Ley y los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos.

Las medidas de excepción deberán estar directa y específicamente encaminadas a conjurar las causas que generan el hecho objetivo y a impedir la extensión de sus efectos.

Toda medida que se decrete durante el estado de excepción debe ser proporcional a la situación que se quiere afrontar, en función de la gravedad de los hechos objetivos, naturaleza y ámbito de aplicación.

No se podrán dictar medidas que atenten contra obligaciones internacionales asumidas por el Ecuador en tratados internacionales y de derechos humanos.

El ámbito de aplicación del decreto de estado de excepción debe limitarse al espacio geográfico donde dichas medidas sean necesarias.

La duración del estado de excepción debe ser limitada a las exigencias de la situación que se quiera afrontar, se evitará su prolongación indebida y tendrá vigencia hasta un plazo máximo de sesenta (60) días, pudiendo renovarse hasta por treinta (30) días adicionales como máximo.

INICIO CONCORDANCIA
Concordancia(s):
H-Art. 30
Constitución de la República del Ecuador: Art. 166-
FIN CONCORDANCIA

Art. 31.- De la notificación a organismos nacionales e internacionales.- De conformidad con la Constitución de la República del Ecuador, la declaratoria de estado de excepción y su renovación, en caso de haberla, deberán ser notificadas a la Asamblea Nacional y a la Corte Constitucional; y, en el ámbito internacional a la Organización de las Naciones Unidas -ONU- y la Organización de Estados Americanos - OEA, en caso de suspensión o limitación de derechos y garantías constitucionales.

La notificación deberá ser realizada dentro de las 48 horas a partir de su firma, explicando



los fundamentos y causas que condujeron a su declaratoria o su renovación, y, las medidas dispuestas.

Si el Presidente o Presidenta no notificare la declaratoria del estado de excepción o su renovación, de ser el caso, éste se entenderá caducado.

Cuando termine el estado de excepción por haber desaparecido las causas que lo motivaron o por terminación del plazo de su declaratoria, el Presidente o la Presidenta de la República deberá notificarla dentro del plazo de cuarenta y ocho (48) horas adjuntando el informe respectivo.

Si las circunstancias lo justifican, la Asamblea Nacional podrá revocar el decreto en cualquier tiempo, sin perjuicio del pronunciamiento que sobre su constitucionalidad pueda realizar la Corte Constitucional.

Capítulo II DE LOS CASOS DE ESTADO DE EXCEPCIÓN

Art. 32.- De los casos de estado de excepción.- Los casos previstos en la Constitución de la República para declarar el estado de excepción son: agresión, conflicto armado internacional o interno, grave conmoción interna, calamidad pública o desastre natural.

INICIO CONCONDANCIA		
Concordancia(s):		
H-Art. 32		
Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional : Art. 119		
FIN CONCORDANCIA		

INICIO CONCOPDANCIA

Art. 33.- De la responsabilidad.- Durante los estados de excepción, el abuso del poder, por cualquier agente o funcionario del Estado, debidamente comprobado será sancionado administrativa, civil y penalmente, y considerando los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos.

Las autoridades civiles, militares y policiales serán responsables de las órdenes que impartan. La obediencia a las órdenes superiores no eximirá de responsabilidad a quienes las ejecuten, conforme lo prevé el último inciso del artículo 166 de la Constitución de la República.



INICIO CONCORDANCIA
Concordancia(s):
<u>H-Art. 32</u>
Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional : Art. 120 Art. 121 Art. 122 Art. 123
FIN CONCORDANCIA

Art. 34.- De la coordinación en caso de desastres naturales.- En caso de desastres naturales la planificación, organización, ejecución y coordinación de las tareas de prevención, rescate, remediación, asistencia y auxilio estarán a cargo del organismo responsable de la defensa civil, bajo la supervisión y control del Ministerio de Coordinación de Seguridad o quien haga sus veces, preservando el mantenimiento del orden público y el libre ejercicio de los derechos y libertades ciudadanas garantizados en la Constitución.

El organismo responsable de la defensa civil actuará en coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados y la sociedad civil, también contará con el apoyo de las Fuerzas Armadas y otros organismos necesarios para la prevención y protección de la seguridad, ejecutará las medidas de prevención y mitigación necesarias para afrontarlos y minimizar su impacto en la población.

Art. 35.- De la complementariedad de acciones de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional.- Declarado el estado de excepción y siempre que el Presidente de la República haya dispuesto el empleo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, deberán coordinar acciones para que las Fuerzas Armadas apoyen a la Policía Nacional, responsable del mantenimiento del orden público, hasta que éste haya sido restablecido. Será el Ministro de Gobierno, Policía y Cultos el responsable de la coordinación de las acciones entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

Capítulo III DE LAS MOVILIZACIONES Y REQUISICIONES

Art. 36.- De la movilización.- Decretado el Estado de Excepción, el Presidente de la República podrá ordenar la Movilización Nacional, que se implementará a través de la Dirección Nacional de Movilización.



La Movilización Nacional, ya sea total o parcial, comprende el paso de las actividades ordinarias del Estado a las de crisis, conflicto o cualquier otra emergencia nacional, por factores humanos o naturales, e implicará la orden forzosa de prestar servicios individuales o colectivos, sean a nacionales y extranjeros, o personas naturales o jurídicas.

La desmovilización será decretada por el Presidente o la Presidenta de la República, en cuanto se restablezcan las condiciones de seguridad que hubiesen sido afectadas.

INICIO CONCORDANCIA
Concordancia(s):
H-Art. 8
Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública: Art.18
FIN CONCORDANCIA

INICIO CONICODO ANICIA

Art. 37.- De las requisiciones.- Para el cumplimiento de la movilización, en los estados de excepción, el Presidente de la República, mediante decreto, podrá disponer, en todo o parte del territorio nacional, la requisición de bienes patrimoniales que pertenezcan a personas jurídicas o naturales, nacionales o extranjeras.

Los bienes no fungibles requisados serán devueltos a sus propietarios una vez satisfecha la necesidad que motivó la requisición o al término del estado de excepción, según corresponda.

Toda requisición de bienes y prestación de servicios, al finalizar el estado de excepción, deberá ser compensada inmediatamente, con la indemnización con el justo valor del servicio, de los bienes o trabajos prestados al Estado. También se indemnizará con el justo valor de los bienes fungibles requisados.

El reglamento a la Ley establecerá los procedimientos de requisición, los responsables, uso de bienes y servicios, valores de la indemnización que correspondan, plazos y formas de pago que se deriven por el uso de los mismos.

INICIO CONCORDANCIA			
Concordancia(s):			



H-Art. 37.-

Constitución de la República del Ecuador:			
Art. 165, num. 5			
FIN CONCORDANCIA			

Título VII

DE LAS ZONAS DE SEGURIDAD: ZONAS DE SEGURIDAD DE FRONTERAS Y ÁREAS RESERVADAS DE SEGURIDAD

Art. 38.- De las zonas de seguridad.- Zonas de seguridad de fronteras y áreas reservadas de seguridad: (Sustituido por el Art. 21 de la Ley s/n, R.O. 279-S, 29-III-2023).- Por zona de seguridad se entiende el espacio territorial ecuatoriano cuya importancia estratégica, características y elementos que la conforman, requieren de una regulación especial con la finalidad de garantizar la protección de esta zona ante eventuales graves afectaciones o amenazas a la seguridad objeto de esta Ley.

Son sujetos de regulación especial los bienes, espacios geográficos, servicios y actividades que se encuentren en esta zona, por lo que, podrán tener regímenes jurídicos específicos y diferenciados.

Son zonas de seguridad las de frontera, los centros de privación de libertad en sus diversos tipos, y las áreas reservadas de seguridad que establezca el Presidente o Presidenta de la República, por recomendación del Consejo de Seguridad Pública y del Estado, previo informe elaborado por el Ministerio rector de la defensa nacional o el Ministerio rector de la seguridad ciudadana, protección interna y orden público, según corresponda.

La declaratoria de zona de seguridad en los centros de privación de libertad, no exime el cumplimiento de los criterios de apoyo temporal, subsidiario, extraordinario, condicionado, regulado, fiscalizado y subordinado de las Fuerzas Armadas al Presidente o Presidenta de la República, de conformidad con la ley. En ningún caso se entenderá que el empleo de las Fuerzas Armadas implica la custodia de las personas privadas de libertad.

El Plan Nacional de Seguridad Integral considerará las acciones de prevención y protección de las zonas de seguridad e incorporará mecanismos, metas e indicadores que permitan ampliar el control en las zonas de seguridad en las fronteras, con énfasis en la supresión de pasos ilegales.

Art. 39.- De la delimitación de zona de frontera.- (Sustituido por el Art. 22 de la Ley s/n, R.O. 279-S, 29-III-2023).- La zona de seguridad de frontera abarca el espacio terrestre de cuarenta (40) kilómetros desde los límites fronterizos hacia el interior del territorio



nacional, el espacio marítimo de diez (10) millas náuticas, y el espacio aéreo correspondiente.

Art. 40.- De la prohibición a extranjeros.- Se prohíbe a las personas naturales o jurídicas extranjeras y a las personas jurídicas nacionales conformadas por uno o más personas naturales o jurídicas extranjeras, la posesión, adquisición y concesiones de tierras en las zonas de seguridad de frontera y en las áreas reservadas de seguridad, con excepción de los espacios poblados y urbanos ubicados en dichas zonas.

Se exceptúan también las adquisiciones de tierras y concesiones realizadas por:

- 1. Matrimonios y uniones de hecho legalmente reconocidos, de ecuatorianas y ecuatorianos con extranjeros, cuya sociedad conyugal y de hecho tengan por lo menos 5 años de duración; y,
- 2. Personas jurídicas nacionales cuyos socios extranjeros se encuentren domiciliados en el país por el lapso de por lo menos 5 años, continuos e ininterrumpidos.

El reglamento a esta ley definirá los términos de su aplicación.

Art. 41.- De los informes del ente rector de la defensa nacional y del ente rector de la seguridad ciudadana, protección interna y orden público.- (Sustituido por el Art. 23 de la Ley s/n, R.O. 279-S, 29-III-2023).- La ejecución de planes, programas, proyectos, convenios, procesos de negociación, o concesión de bienes y servicios estratégicos, zonas de seguridad, áreas reservadas de seguridad del Estado, especialmente aquellas relacionadas con puertos, aeropuertos, zonas de frontera, servicios marítimos, servicios relacionados con servicio diplomático, que estén relacionados con los centros de privación de libertad o con el control aduanero, requerirán informes del Órgano Rector de la Defensa Nacional y del Órgano Rector de la Seguridad Ciudadana, Protección Interna y Orden Público.

Título VIII DE LOS SECTORES ESTRATÉGICOS DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO

Capítulo I

DE LA REGULACIÓN Y CONTROL DE LOS SECTORES ESTRATÉGICOS DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO

Art. 42.- De la Regulación de los sectores estratégicos de la seguridad y defensa del Estado.- (Sustituido por el Art. 24 de la Ley s/n, R.O. 279-S, 29-III-2023).- Son sectores estratégicos de la seguridad del Estado los previstos en la Constitución y los correspondientes a la industria de la defensa, de seguridad interna, de investigación científica y tecnológica para fines de defensa y seguridad interna.

A solicitud del Consejo de Seguridad Pública y del Estado, la entidad encargada de la coordinación de la seguridad pública y del Estado emitirá el informe correspondiente



sobre los impactos en la seguridad del Estado que se hayan generado o puedan generarse por las actividades concernientes a los sectores estratégicos. La gestión de los sectores estratégicos no pondrá en riesgo la seguridad nacional, ciudadana, orden público y protección interna.

El ministerio rector de la defensa nacional emitirá la normativa respectiva, a fin de regular el uso de áreas o zonas alrededor de las zonas de seguridad que correspondan.

Los gobiernos autónomos descentralizados acatarán las disposiciones de esta normativa independientemente de su autonomía administrativa.

En el caso de entidades de investigación científica y tecnológica, el Estado podrá establecer acuerdos para fines de defensa, seguridad interna y prevención.

Art. 43.- De la protección de instalaciones e infraestructura.- El Ministro de Defensa Nacional ante circunstancias de inseguridad críticas que pongan en peligro o grave riesgo la gestión de las empresas públicas y privadas, responsables de la gestión de los sectores estratégicos dispondrá a las Fuerzas Armadas, como medida de prevención, la protección de las instalaciones e infraestructura necesaria para garantizar el normal funcionamiento. Art. 43.1.- (Agregado por el Art. 25 de la Ley s/n, R.O. 279-S, 29-III-2023).- Las instituciones del Estado que tengan bajo su responsabilidad, procesos de negociación, concesión de bienes y servicios de los sectores estratégicos, zonas de seguridad, áreas reservadas de seguridad del Estado, incluirán en todos los contratos o convenios, cláusulas especiales de seguridad, estipuladas, por el ente rector de la defensa nacional y el ente rector de seguridad ciudadana, protección interna y orden público, especialmente aquellas relacionadas con puertos, aeropuertos, zonas de frontera, servicios marítimos, servicios relacionados con servicio diplomático, o que estén relacionados con los centros de privación de libertad o con el control aduanero.

En ningún caso se podrá concesionar estos bienes, áreas o servicios y sectores estratégicos, poniendo riesgo la seguridad nacional, ciudadana, orden público y protección interna.

Capítulo II

DE LA PARTICIPACIÓN DE MIEMBROS DE LAS FUERZAS ARMADAS Y LA POLICÍA NACIONAL EN DIRECTORIOS Y ORGANISMOS COLEGIADOS

Art. 44.- De la participación de miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en directorios y organismos colegiados.- En concordancia con su naturaleza no deliberante, los miembros activos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional no podrán participar en directorios, comisiones, comités, consejos consultivos y en general organismos colegiados de instituciones, empresas públicas y organismos de regulación y control, a excepción de las entidades de seguridad social de las fuerzas armadas y la policía nacional, y de aquellas empresas relacionadas directamente con la seguridad interna y externa.



Título IX DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Art. 45.- De la Participación ciudadana.- (Sustituido por la Disp. Reformatoria Vigésima Octava de la Ley s/n, R.O. 131-3S, 22-VIII-2022).- La ciudadanía podrá ejercer su derecho de participación en el Sistema de Segundad Pública, de conformidad con lo prescrito en la Constitución, las normas legales de participación ciudadana y control social, de modo individual u organizado, en los procesos de definición de las políticas públicas y acciones de planificación, evaluación y control para los fines de la presente ley; exceptuando la participación en la aplicación del uso legítimo de la fuerza, que es de responsabilidad del Estado, a cargo de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, de conformidad con la Ley de la materia.

Título X DE LAS INFRACCIONES

Art. 46.- De las infracciones.- Las infracciones penales a la presente ley serán sancionadas de conformidad con las leyes penales aplicables.

DISPOSICIONES GENERALES

Primera.- En todas las leyes en donde se haga mención al Consejo de Seguridad Nacional - COSENA- deberá decirse Ministerio de Coordinación de Seguridad.

Segunda.- Los miembros de la Policía Nacional y de Fuerzas Armadas que pasen a formar parte de las dependencias a cargo de la Secretaría Nacional de Inteligencia, no suspenderán la continuación de su carrera policial o militar, durante el tiempo que presten sus servicios en esa institución. Durante ese tiempo, estarán sujetos al cumplimiento de las órdenes provenientes de las autoridades de la Secretaría Nacional de Inteligencia exclusivamente.

Idéntica situación se observará para los casos de personal civil sujeto a la LOSCCA que pase a formar parte de los servicios de inteligencia.

Tercera.- La Secretaría Nacional Técnica de Desarrollo de Recursos Humanos y Remuneraciones del Sector Público, SENRES, fijará con fundamento en la presente ley, su reglamento general de aplicación y la estructura orgánica por procesos de la Secretaría Nacional de Inteligencia, las normas particulares relacionadas con la carrera administrativa, categorización, ascensos, sanciones, etc. correspondientes al personal de la Secretaría Nacional de Inteligencia.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- El Pleno del Consejo Nacional de la Judicatura en el plazo de treinta (30) días, contados desde la promulgación de la presente ley, emitirá la normativa que regule el registro especial sobre las peticiones de los organismos de inteligencia relacionadas con operaciones encubiertas y las actuaciones judiciales de ellas derivadas, las que conservarán la reserva.



Segunda.- Los servidores públicos que vienen prestando sus servicios en la Secretaría General del COSENA, bajo nombramiento o contrato, previo a un proceso de evaluación, calificación y selección de acuerdo a los requerimientos y aplicación de los fines de la presente ley, en el marco de la racionalización de recursos, pasarán a formar parte del Ministerio de Coordinación de Seguridad, o quien haga sus veces.

El personal policial y militar que se encuentre desempeñando funciones en la Secretaría General del COSENA, pasará a disposición de las correspondientes autoridades militares y policiales. Los bienes de la Secretaría General del COSENA, formarán parte del Ministerio de Coordinación de Seguridad, o quien haga sus veces.

Tercera.- Los recursos, el patrimonio y en general, todos los activos y pasivos de la Dirección Nacional de Inteligencia, sus funciones, atribuciones, representaciones, delegaciones, derechos, obligaciones, unidades y presupuesto, se transferirán a la Secretaría Nacional de Inteligencia (SNI) en todo lo que no contravenga a la presente ley.

Los servidores públicos que vienen prestando sus servicios en la Dirección Nacional de Inteligencia, bajo nombramiento o contrato, se sujetarán a un proceso de evaluación y selección, de acuerdo a los requerimientos y aplicación de los fines de la presente Ley, en el marco de la racionalización de recursos, previo paso a formar parte de la Secretaría Nacional de Inteligencia.

Cuarta.- Fusiónase por absorción la Corporación Ejecutiva para la Reconstrucción de las Zonas Afectadas por el Fenómeno El Niño - CORPECUADOR, a la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. Dentro del plazo de trescientos sesenta (360) días, el Presidente de la República expedirá, mediante Decreto Ejecutivo, el procedimiento para su ejecución, momento a partir del cual se entenderá derogada su ley de creación, con excepción de lo previsto en el siguiente inciso.

El Ministerio de Finanzas transferirá inmediatamente al organismo fusionado los fondos que requiera CORPECUADOR para el cumplimiento de las obras planificadas, adjudicadas y controladas por ésta hasta el 31 de diciembre del 2009, además de otras que se requieran para la prevención de posibles inundaciones. Los fondos originados en la letra g) del artículo 9 de la Ley de Creación de CORPECUADOR serán asignados al Ministerio de Agricultura, para desarrollar programas de incremento en la productividad de los pequeños productores bananeros.

Nota:

La Corporación Ejecutiva para la Reconstrucción de las Zonas Afectadas por el Fenómeno El Niño - CORPECUADOR, fue absorbida por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, conforme el procedimiento establecido por el D.E. 211 (R.O. 114, 22-I-2010).

Disposición final.- Deróguense todas las disposiciones generales y especiales que contravinieren de modo expreso a la presente Ley, en especial, las siguientes:

1. La Ley de Seguridad Nacional, promulgada en el Registro Oficial No. 892 de 9 de agosto



de 1979 y todas sus reformas;

- 2. Reglamento General a la Ley de Seguridad Nacional, promulgada en el Registro Oficial No. 642 de 14 de marzo de 1991 y todas sus reformas; y,
- 3. El artículo 7 y las letras d) y l) del artículo 16 de la Ley Orgánica de la Defensa Nacional, promulgada en el Registro Oficial No. 4 de 19 de enero del 2007.

La presente ley entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el Registro Oficial.

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los diez días del mes de septiembre del dos mil nueve.

FUENTES DE LA PRESENTE EDICIÓN DE LA LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DEL ESTADO

- 1.- Ley de Seguridad Pública y del Estado (Suplemento del Registro Oficial 35, 28-IX-2009)
- 2.- Ley Reformatoria a la Ley de Seguridad Pública y del Estado (Segundo Suplemento del Registro Oficial 263, 9-VI-2014).
- 3. Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público (Suplemento del Registro Oficial 19, 21-VI-2017).
- 4.- Sentencia No. 33-20-IN/21 (Edición Constitucional del Registro Oficial 185, 8-VI-2021).
- 5.- Ley Orgánica que regula el Uso Legítimo de la Fuerza (Tercer Suplemento del Registro Oficial 131, 22-VIII-2022).
- 6.- Ley Orgánica Reformatoria a varios cuerpos legales para el fortalecimiento de las Capacidades Institucionales y la Seguridad Integral (Suplemento del Registro Oficial 279, 29-III-2023)